



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente

Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

Materia: Civil

Magistrada Ponente:  
Lic. Claudia Lucía Domínguez  
Acuña

Secretaria de Estudio y Cuenta:  
Lic. Ma. Teresa Cruz Nieto

**PRIMERA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL,  
ZONA 01 TUXTLA. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL  
ESTADO DE CHIAPAS.-** Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a nueve de  
agosto de dos mil veinticuatro.

**V I S T O S** para resolver los autos que integran el toca civil número  
573-C-1C01/2018 primer subsecuente, formado con motivo al recurso  
de apelación interpuesto por \*\*\*\*\*  
, en contra del  
auto de veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, pronunciado por el  
Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del distrito judicial de Chiapa,  
en autos del expediente **464/2017**, relativo al Juicio **ORDINARIO  
CIVIL (ACCIÓN DE NULIDAD DE ESCRITURA)**, tramitado por \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
, en contra de \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* licenciada **CRISTINA GABRIELA BONIFAZ VILLAR**, Notaria  
Pública número 86 del Estado de Chiapas, licenciado **LUIS ALBERTO  
ALBORES FIGUEROA**, Notario Público número 178 del Estado de  
Chiapas y **DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA  
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS;**  
y,

**R E S U L T A N D O:**



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

**PRIMERO.** Con fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, el Juez natural, pronunció el auto apelado, que es del tenor literal siguiente:

**“...PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHIAPA.- CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; A 26 VEINTISÉIS DE ABRIL DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.-----**

- - - **VISTO:** El estado procesal que guardan los presentes autos, de lo cual se advierte que en proveído de fecha 11 once de abril de 2024 dos mil veinticuatro, se ordenó citar a las partes para oír sentencia definitiva; sin embargo, una vez que fueron revisadas las constancias que obran en él, se advierte que existe imposibilidad para dictar la resolución que en derecho corresponde, por cuanto que, sin prejuzgar sobre la procedencia o improcedencia del presente, se pone de manifiesto que en los autos del expediente 1069/2017, mediante oficio número JCC/2055/E/A/2017, fue remitido a la Primera Sala Regional Colegiada en materia Civil, Zona 01 Tuxtla, el documento base consistente en copia certificada del instrumento público número 7,149 siete mil ciento cuarenta y nueve, libro 100, paso ante la fe del Licenciado Gilberto de Jesús Batiz López, titular de la notaría pública número 32 treinta y dos del Estado, constante de tres fojas, en el que consta el Poder General para Pleitos y Cobranzas otorgado por \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*, a favor de \*\*\*\* \*, el cual había sido requerido por la superioridad mediante oficio 1084-C/2018, dentro del Toca Número 573-C-1C01/2018, formado con motivo al recurso de apelación interpuesto por \*\*\*\* \* en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas del actor \*\*\*\*\* , en contra del auto 21 veintiuno de septiembre de 2018 dos mil dieciocho; sin embargo mediante oficio 154-C/2019, fue remitido testimonio de la resolución pronunciada sin la devolución del instrumento público enviado. Poder que es necesario tener a la vista, pues, de las constancias de autos se advierte que aún no se ha resuelto la excepción de falta de personalidad planteada por los demandados, la cual debió de haber sido resuelta previamente, sin embargo, al no haberse dictado la resolución correspondiente, el juzgador deberá resolverla en la sentencia definitiva. En consecuencia, mediante oficio requiérase a la Primera Sala Regional Colegiada en materia Civil, Zona 01 Tuxtla, el documento base remitido, debiendo anexar copia de los oficios antes mencionados.-

- - - Por otra parte, en los autos del expediente número 464/2017, fue desahogada la prueba Pericial en Grafoscopia; sin embargo, indebidamente no fue designado de común acuerdo perito de los demandados ni este juzgado nombró un perito en rebeldía de los demandados; por lo que únicamente obra en autos los dictámenes emitidos por el perito nombrado por el actor \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , el peritos nombrado por el



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

demandado \*\*\*\* \*\*\*\*\* y el perito nombrado por este juzgado en rebeldía por el demandado \*\*\*\*\* , no así dictámenes periciales de los demás demandados; y por cuanto cuando las partes no oponen las mismas excepciones no están obligadas a litigar unidas y por lo tanto se debió haber designado perito en rebeldía de los demás codemandados, de conformidad con la fracción I del artículo 355 del Código Adjetivo Civil del Estado; a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, por conducto del ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO **REQUIÉRASELES** a la Licenciada CRISTINA GABRIELA BONIFAZ VILLAR, Notario Público número 86 ochenta y seis del Estado, al Licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, Notario Público número 178 ciento setenta y ocho del Estado y al Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Chiapa de Corzo, Chiapas, en los domicilios señalados en autos para que dentro del término de **03 TRES DÍAS** contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, como lo establece el artículo 137 fracción IV del ordenamiento legal antes invocado; manifiesta a cuál de los dictámenes periciales se adhieren. **APERCIBIDOS** que de no hacerlo dentro del término concedido se les tendrá adheridos a los dictámenes emitidos en autos.- - - - - Asimismo, la citada prueba pericial en Grafoscopia fue desahogada en efecto de verificar si la firma estampada es la escritura pública número 1,375 mil trescientos setenta y cinco, volumen 31 treinta y uno de enero de 2012 dos mil doce, fue puesta de puño y letra por \*\*\*\*\* , pues el actor refiere en los hechos de la demanda no haberlo firmado por lo que reclama su nulidad absoluta; sin embargo, de la copia certificada del citado instrumento público fue obra agregada en autos se advierte que se trata de un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, limitado en cuanto a su objeto e irrevocable, otorgado no solo por \*\*\*\*\* , sino también por la listisconsorte \*\*\*\*\* . Luego, para conocer la verdad sobre los puntos cuestionados y dictar una sentencia lo más apegada a derecho, con la facultad que le confiere al suscrito juzgador, el artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas, se ordena la ampliación de la prueba pericial en Grafoscopia a efecto de verificar si la firma estampada en la escritura pública que se reclama la nulidad, fue opuesta por la litisconsorte \*\*\*\*\* . Consecuentemente, por conducto del ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO **CITese** a \*\*\*\*\* en el domicilio ubicado en CALLE 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE UMERO 450 CUATROCIENTOS CINCUENTA, DEL BARRIO FRANCISCO I. MADERO, DE CHIAPA DE CORZO, Chiapas, a **LAS 11:30 ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 23 VEINTITRÉS DE MAYO DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO**, para que comparezca ante el Despacho de este Juzgado debidamente identificada con credencial oficial, para la **DILIGENCIA DE TOMA DE MUESTRAS DE FIRMAS Y ESCRITURAS**; misma a que deberán comparecer los peritos que previamente han sido designados y han rendido sus dictámenes, por lo que se faculta al ACTUARIO JUDICIAL que corresponda, para que **CITE** a los Licenciados **JOSÉ ALBERTO FLORES DÍAZ, CARLOS GÓMEZ NARCÍA, JUAN MANUEL LAZOS ROSALES, AMIZADAIN FONSECA ZEA y OSCAR**



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

**LUIS BARAJAS SANCHEZ**, en los domicilios autorizados en la “Lista de Personas que pueden fungir como Peritos ante los Órganos del Poder Judicial del Estado”, la fecha y hora señalada para que asistan a la diligencia de toma de muestra de firmas y escrituras, haciéndoles de su conocimiento que el término legal concedido para emitir sus dictámenes, comenzará a computarse al día siguiente de la diligencia antes señalada. Ahora bien, por cuanto el domicilio de los peritos citados, se encuentra fuera de este Distrito Judicial, con las inserciones necesarias y de conformidad con el artículo 104 del cuerpo de leyes citado, **GÍRESE ATENTO EXHORTO** al Juzgado del Ramo Civil en turno, del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva a mandar a diligenciarlo en sus términos facultándose al juez exhortado para que haga uso de las medidas de apremio que estime oportunas y acuerde promociones de las partes tendentes al cumplimiento de lo aquí ordenado; hecho que sea lo anterior, devolverlo a la brevedad posible exhorto que queda a disposición de la parte interesada para hacerlo llegar a su destino.-  
- - - Desahogada la Pericial en materia de Avalúo, en términos del numeral 414 del ordenamiento legal de la materia, procédase a desahogar la fase de alegatos, en los autos del expediente número 1069/2017.- - -  
- - - En consecuencia, de acuerdo a lo anterior se deja de dictar la resolución que en derecho corresponde, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Hecho que sea y a petición de parte se acordará lo conducente.- - -  
- - - **NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE...**” (SIC)

**SEGUNDO.** Inconforme con el contenido del mismo, la parte actora mediante escrito de fecha ocho de mayo de dos mil veinticuatro, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por el juez de origen en el efecto devolutivo por auto de catorce de mayo del año que se cita (2024); ordenando el trámite correspondiente, así como dar vista a la parte contraria para contestar agravios, derecho del que solo hizo uso el demandado \*\*\*\*\*.

**TERCERO.** Mediante auto de Presidencia de once de junio de dos mil veinticuatro, esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, tuvo por recibido mediante oficio JCC/01128-B/2024, de fecha tres de junio de dos mil veinticuatro, signado por el Juez del



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

---

Ramo Civil del distrito judicial de Chiapa, por el que en dos tomos remitió testimonio de apelación deducidos del expediente 464/2017 y su acumulado 1069/2017 y anexos consistente en el escrito original de interposición de recurso de apelación y de expresión de agravios, así como el diverso de contestación de agravios presentado por \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*; ordenándose formar el toca correspondiente en su primer subsecuente, así como el registro en el libro de gobierno; sin embargo, por cuanto el toca inicial 573-C-1C01/2018 y testimonios se encontraban en el Archivo General del Tribunal Superior de Justicia del Estado, desde el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, siendo necesario tenerlo a la vista para substanciar el recurso interpuesto, se ordenó solicitar su devolución a esta Sala.

Cumplido lo anterior, mediante proveído de dos de julio de dos mil veinticuatro, se confirmó la calificación del grado y se declaró legalmente admitido el recurso de apelación en el efecto devolutivo; citándose a las partes para oír sentencia y turnando los autos a la Magistrada Ponente a efecto que elabore el proyecto de resolución y lo ponga a consideración del Pleno; mismo que ahora se engrosa; y,

### **C O N S I D E R A N D O:**

**PRIMERO.** Esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es competente para conocer y resolver sobre el presente asunto, por impugnarse una resolución dictada por un Juzgado de Primera que se encuentra dentro del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción esta Sala Civil, de conformidad con lo establecido por los artículos 49 y 59



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

fracción I, del Código de Organización del Poder Judicial del Estado y 686-A en relación con el 679 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

**SEGUNDO.** El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, de conformidad con lo establecido en el artículo 663 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.

**TERCERO.** Los agravios expresados por la parte actora inconforme, mediante libelo de fecha ocho de mayo de dos mil veinticuatro, son del tenor literal siguiente:

**“...AGRAVIOS.**

**PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO.** *Disposiciones legales violadas no aplicadas o aplicadas inexactamente, las que se desprenden de los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, y demás relativos y aplicables al Código de procedimientos civiles vigente en la entidad*

*Parte de la resolución que causa los presentes agravios, lo constituye **auto de fecha 26 de abril del año 2024, que ordena la reposición del procedimiento para el desahogo de pruebas dejadas de desahogar según el juzgador, surtiendo sus efectos el 30 de abril del año 2024***

*En el apartado que interesa ESTABLECE... a la licenciada CRISTINA GABRIELA BONIFAZ VILLAR, NOTARIO PÚBLICA NÚMERO 86, DEL ESTADO, LIC LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, Notario Público número 178 del Estado y Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Chiapa de Corzo, Chiapas, manifiesten a cuál de los dictámenes periciales se adhieren en la presente controversia.*

*Proveído que vulnera los artículos 45 y 53 del Código de procedimientos civiles vigente en la entidad debido a que los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoció la posibilidad de que los particulares violen los derechos fundamentales cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés público; sin embargo, aun cuando los notarios públicos ejercen funciones de orden público, no tienen, en su calidad de particulares, el carácter de actor, demandado o autoridad responsable para efectos del juicio ordinario civil y*



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

*ni del amparo, porque si bien al redactar y aprobar escrituras deben observar determinadas reglas, entre ellas la relativa a dejar acreditada la personalidad de quien comparezca en representación de una persona, la omisión en que pudieran incurrir no es un acto equivalente a los de autoridad, o parte en un juicio, en virtud de que no actúan unilateral, imperativa y coercitivamente, es decir, desde una suposición de supra a subordinación, al margen del concurso de voluntades de las partes contratantes, sino a petición de éstas, de manera que la voluntad de los gobernados no se encuentra supeditada al acto jurídico que se plasmó en el instrumento público relativo, de forma que tuvieran la obligación inexorable de acatarlo, lo que significa que las funciones que los fedatarios realizan no están previstas en una norma general que les otorgue facultades para actuar como parte de un juicio o como una autoridad del Estado, esto es, que les permita dictar, ordenar o ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas.*

*Razón por lo cual los notarios públicos y el delegado del registro público de la propiedad y del comercio del distrito de Chiapa de Corzo sean considerados como partes atendiendo a lo requerido por el juzgador de que se adhieran a uno u otro dictamen es necesario que los actos reclamados sean equivalentes a los de autoridad, o parte primordial en un juicio ordinario civil, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que sus funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general, lo que implica que esa circunstancia deriva de la naturaleza y características propias del acto, el cual debe ser unilateral, obligatorio y afectar la esfera jurídica del gobernado.*

*En ese orden de ideas, la protocolización de una escritura pública realizada por un notario público, en el ámbito de sus atribuciones conforme a la ley del notariado respectiva, no es un acto equivalente al de una autoridad ya que no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza un acto jurídico que celebran las partes, derivado de un acuerdo de voluntades.*

**ART. 45.-** TODO EL QUE CONFORME A LA LEY ESTÉ EN EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES PUEDE COMPARECER EN JUICIO.

**ART. 53.-** SIEMPRE QUE DOS O MÁS PERSONAS EJERCITEN UNA MISMA ACCIÓN U OPONGAN LA MISMA EXCEPCIÓN, DEBERÁN LITIGAR UNIDAS Y BAJO UNA MISMA REPRESENTACIÓN. A ESTE EFECTO DEBERÁN, DENTRO DE TRES DÍAS, NOMBRAR UN PROCURADOR JUDICIAL QUE LOS REPRESENTA A TODOS, CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO, O ELEGIR DE ENTRE ELLOS MISMOS UN REPRESENTANTE COMÚN. SI NO NOMBRAREN PROCURADOR NI HICIEREN LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE O NO SE PUSIEREN DE ACUERDO EN ELLA, EL



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

JUEZ NOMBRARÁ AL REPRESENTANTE COMÚN ESCOGIENDO A ALGUNO DE LOS QUE HAYAN SIDO PROPUESTOS; Y SI NADIE LO HUBIERE SIDO, A CUALQUIERA DE LOS INTERESADOS. EL PROCURADOR NOMBRADO TENDRÁ TODAS LAS FACULTADES QUE EN SU PODER LE HAYAN CONCEDIDO. EL REPRESENTANTE COMÚN TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES QUE SI LITIGARA EXCLUSIVAMENTE POR SU PROPIO DERECHO, EXCEPTO LAS DE TRANSIGIR Y COMPROMETER EN ÁRBITROS, A MENOS DE QUE EXPRESAMENTE LE FUEREN TAMBIÉN CONCEDIDAS POR LOS INTERESADOS.

Consecuentemente, La licenciada CRISTINA GABRIELA BONIFAZ VILLAR, Notario Pública número 86, del estado, LIC. LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, notario público número 178 del Estado y Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Chiapa de Corzo, Chiapas, **que dan autenticidad y forma legal al acto jurídico base de la acción, en el juicio natural, no actúa como parte en un juicio, o como autoridad para efectos del amparo, sino como simple fedatario de ese acto que fue materia de una controversia jurisdiccional y por ende, pretender que se adhieran a un determinado dictamen pericial resulta improcedente, al no tener interés legítimo ni jurídico en el juicio de nulidad de instrumentos notariales que se ventila.**

no obstante que existía consagrado un derecho a favor de los particulares para presentar quejas o juicios civiles o denuncias, ante la concurrencia de conductas indebidas de servidores públicos, conforme a las correspondientes legislaciones en materia de responsabilidad administrativa, no era factible que se configurara el interés legítimo, al no existir disposición constitucional o legal que vinculara al notario como parte integral de un juicio ordinario civil al emitir un pronunciamiento específico, al derivar la resolución que debía adoptarse sobre dicha problemática, de una facultad exclusiva de carácter punitivo a cargo del Estado.

Por su parte, la Ley del Notariado local se advierte que, dentro del cúmulo de facultades con las que cuenta el gobernador de esa entidad federativa, como autoridad elegida democráticamente, se encuentra una de carácter discrecional, dirigida a nombrar notarios provisionales de manera directa, de entre una diversidad de sujetos con cualidades determinadas.

En consecuencia, y atento a la naturaleza de la designación directa de los notarios provisionales, que tiene su génesis en el ejercicio de una facultad discrecional, deriva que la persona que tenga formalmente reconocida la calidad de notario carece de interés legítimo para reclamar o ser parte de un juicio ordinario civil en virtud de que ese entorno no incorpora a su esfera de derechos, ni aun de manera indirecta.

Tiene aplicación  
Registro digital: 2020355  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*Décima Época*

*Materias(s): Común, Administrativa*

*Tesis: (II Región)1o.4 A (10a.)*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4446*

*Tipo: Aislada*

ASPIRANTES A NOTARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN EL AMPARO INDIRECTO LA DESIGNACIÓN DIRECTA DE NOTARIOS PROVISIONALES REALIZADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE DICHA ENTIDAD CON SUSTENTO EN SU FACULTAD DISCRECIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL NOTARIADO LOCAL, AL NO EXISTIR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL O CONVENCIONAL QUE ESTABLEZCA UN DERECHO OBJETIVO QUE VINCULE A ÉSTE A SUJETARSE A UN PROCEDIMIENTO REGLADO, NI A TOMAR EN CONSIDERACIÓN A UNA PERSONA DETERMINADA POR SUS CONDICIONES PERSONALES.

Conforme a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los elementos constitutivos del interés legítimo, los cuales se encuentran reflejados, entre otras, en las jurisprudencias P./J. 50/2014 (10a.), 1a./J. 38/2016 (10a.), 2a./J. 41/2019 (10a.) y 2a./J. 51/2019 (10a.), se obtiene que para que pueda emerger el citado interés, deben saldarse múltiples exigencias de carácter concurrente, por ejemplo, la vinculada a la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún derecho objetivo susceptible de ser transgredido, ya sea de manera individual o colectiva. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 321/2018, estableció que no obstante que existía consagrado un derecho a favor de los particulares para presentar quejas o denuncias, ante la concurrencia de conductas indebidas de servidores públicos, conforme a las correspondientes legislaciones en materia de responsabilidad administrativa, no era factible que se configurara el interés legítimo, al no existir disposición constitucional o legal que vinculara a la autoridad respectiva a emitir un pronunciamiento específico, al derivar la resolución que debía adoptarse sobre dicha problemática, de una facultad exclusiva de carácter punitivo a cargo del Estado. Por su parte, de los numerales 77, fracción XXXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 14 de la Ley del Notariado local se advierte que, dentro del cúmulo de facultades con las que cuenta el gobernador de esa entidad federativa, como autoridad elegida democráticamente, se encuentra una de carácter discrecional, dirigida a nombrar notarios provisionales de manera directa, de entre una diversidad de sujetos con cualidades determinadas, cuyo propósito estriba en que las notarías de nueva creación o vacantes funcionen en óptimas condiciones hasta que se nombre a un titular, es decir, ese tipo de designación tiene como finalidad la normalización de una situación institucional por un tiempo determinado. En consecuencia, y atento a la naturaleza de la designación directa de los notarios provisionales, que tiene su génesis en el ejercicio de una facultad discrecional, deriva que la persona que tenga formalmente reconocida la calidad de aspirante a notario carece de interés legítimo para reclamar en sede constitucional ese nombramiento, en virtud de que ese entorno no incorpora a su esfera de derechos, ni aun de manera indirecta, uno de carácter objetivo, oponible al citado gobernador en la hipótesis de referencia, en tanto que, de concluir en sentido adverso, se llegaría al extremo de avalar que cualquier designación directa emanada de una facultad discrecional de un poder político fuera revisable por el Poder Judicial de la



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*Federación mediante el amparo indirecto, con motivo de la inconformidad de quienes, a pesar de ser elegibles para el puesto condigno, como en el caso de los aspirantes a notarios, se crean con mayor capacitación o con un mejor derecho para acceder a ese puesto de manera provisional que la persona que al final fue nombrada, lo cual, de suyo desnaturalizaría la potestad discrecional que se distingue por la noción de "elegibilidad y la libertad de actuar o abstenerse", al grado de eliminar esa figura del ordenamiento jurídico, al someterla a un procedimiento reglado, o bien, a constreñir al titular del Ejecutivo estatal a tomar en consideración las condiciones personales del aspirante quejoso, no obstante que el legislador no previó esos aspectos al crear la norma; sin que tampoco sea dable aseverar que el artículo 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce un derecho objetivo de ser considerado, en condiciones generales de igualdad, para el nombramiento de un notario provisional, vía designación directa, ya que la lectura crítica de ese precepto no llega al extremo de suprimir la posibilidad de que se efectúen nombramientos provisionales, sustentados en una facultad discrecional; inclusive, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso "Reverón Trujillo Vs. Venezuela" no proscribió la facultad discrecional de las entidades públicas para designar funcionarios transitoriamente, máxime que los aspirantes a notarios, a pesar de no haber sido elegidos por esa vía, están en condiciones de participar en los respectivos concursos de oposición para la designación de los puestos titulares de las notarías vacantes o de nueva creación correspondientes.*

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN.**

*Amparo en revisión 373/2018 (cuaderno auxiliar 286/2019) del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Gobernador Constitucional del Estado de México y otros. 10 de mayo de 2019. Mayoría de votos. Disidente: Rubén Paulo Ruiz Pérez. Ponente: Roberto Obando Pérez. Secretario: Alan Malcolm Bravo de Rosas.*

*Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), 1a./J. 38/2016 (10a.), 2a./J. 41/2019 (10a.) y 2a./J. 51/2019 (10a.), de títulos y subtítulos: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.", "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES)." e "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas, 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas y 8 de marzo de 2019 a las 10:11 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 60, 33, Tomo II, agosto de 2016, página 690 y 64, Tomo II, marzo de 2019, páginas 1979 y 1598, respectivamente.*



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 321/2018 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de marzo de 2019 a las 10:11 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Tomo II, marzo de 2019, página 1937.*

*Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 44/2021 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de 17 de marzo de 2021.*

*Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 149/2023, pendiente de resolverse por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.  
Esta tesis se publicó el viernes 09 de agosto de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.*

*Registro digital: 192034*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Novena Época*

*Materias(s): Civil*

*Tesis: II.3o.C.4 C*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 971*

*Tipo: Aislada*

**NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN DERIVA DE UNA ORDEN JUDICIAL.**

*De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Efectivamente, el notario es un fedatario público al que la ley le otorga la facultad de autenticar y dar forma a los actos y hechos jurídicos, por lo que cuando actúa en ejercicio de esas facultades, a virtud de una disposición jurisdiccional, su actuación no implica la aplicación o ejecución de alguna determinación de observancia obligatoria, como tampoco la modificación de una situación jurídica determinada o la afectación de la esfera legal del gobernado, ya que no trata de imponer disposiciones normativas ni actúa motu proprio, sino en acatamiento del referido mandato jurisdiccional, que es donde propiamente se hizo la aplicación de la ley y en donde se decretó la afectación de la esfera jurídica de las partes contendientes. Consecuentemente, el fedatario que da autenticidad y forma legal al acto jurídico base de la acción, en el juicio natural, no actúa como autoridad para efectos del amparo, sino como simple fedatario de ese acto que fue materia de una controversia jurisdiccional y por ende, el juicio de amparo contra actos del notario público, resulta improcedente.*

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.**

*Amparo en revisión 2/99. Mónica Villegas Delgadillo. 11 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Romero Vázquez. Secretario: José Fernando García Quiroz.*



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*Registro digital: 2024593*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Undécima Época*

*Materias(s): Común*

*Tesis: II.3o.A.4 K (11a.)*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo V, página 4684*

*Tipo: Aislada*

**NOTARIOS PÚBLICOS. LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA NO ES UN ACTO EQUIVALENTE AL DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, YA QUE ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES DERIVADO DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES.**

*Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que para que un particular se considere autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es necesario que los actos reclamados sean equivalentes a los de autoridad, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que sus funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general, lo que implica que esa circunstancia deriva de la naturaleza y características propias del acto, el cual debe ser unilateral, obligatorio y afectar la esfera jurídica del quejoso. En ese orden de ideas, la protocolización de una escritura pública realizada por un notario público, en el ámbito de sus atribuciones conforme a la ley del notariado respectiva, no es un acto equivalente al de una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza un acto jurídico que celebran las partes, derivado de un acuerdo de voluntades.*

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.**

*Queja 320/2021. 20 de enero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Núñez Loyo. Secretaria: Elizabeth Vázquez Pineda.*

*Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.*

*Registro digital: 2018002*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Décima Época*

*Materias(s): Común*

*Tesis: XVII.2o.P.A.4 K (10a.)*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2410*

*Tipo: Aislada*

**NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE AL REDACTAR Y APROBAR ESCRITURAS.**

*En la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, que*



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

modificó los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoció la posibilidad de que los particulares violen derechos fundamentales cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés público; sin embargo, aun cuando los notarios públicos ejercen funciones de orden público, no tienen, en su calidad de particulares, el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia, porque si bien al redactar y aprobar escrituras deben observar determinadas reglas, entre ellas la relativa a dejar acreditada la personalidad de quien comparezca en representación de una persona, la omisión en que pudieran incurrir no es un acto equivalente a los de autoridad, en virtud de que no actúan unilateral, imperativa y coercitivamente, es decir, desde una posición de supra a subordinación, al margen del concurso de voluntades de las partes contratantes, sino a petición de éstas, de manera que la voluntad de los gobernados no se encuentra supeditada al acto jurídico que se plasmó en el instrumento público relativo, de forma que tuvieran la obligación inexorable de acatarlo, lo que significa que las funciones que los fedatarios realizan no están previstas en una norma general que les otorgue facultades para actuar como una autoridad del Estado, esto es, que les permita dictar, ordenar o ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas.

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.**

Amparo en revisión 36/2017. Caxtor, S.A. de C.V. 19 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel González Escalante. Secretaria: Araceli Delgado Holguín.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de septiembre de 2018 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

**SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO:** Disposiciones legales violadas no aplicadas o aplicadas inexactamente, las que se desprenden de los artículos 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, y demás relativos y aplicables al Código de procedimientos civiles vigente en la entidad.

Parte de la resolución que causa los presentes agravios, lo constituye auto de fecha 26 de abril del año 2024, que ordena la reposición del procedimiento para el desahogo de pruebas dejadas de desahogar según el juzgador, surtiendo sus efectos el 30 de abril del año 2024.

..."Asimismo, la citada prueba pericial en Grafoscopia fue desahogada en efecto de verificar si la firma estampada es la escritura pública número 1,375 mil trescientos setenta y cinco, volumen 31 treinta y uno de enero de 2012 dos mil doce, fue puesta de puño y letra por \*\*\*\*\* , pues el actor refiere en los hechos de la demanda no haberlo firmado por lo que reclama su nulidad absoluta; sin embargo, de la copia certificada del citado instrumento público fue obra agregada en autos se advierte que se trata de un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, limitado en cuanto a su objeto e irrevocable, otorgado no solo por \*\*\*\*\* , sino también por la listisconsorte \*\*\*\*\* , luego, para conocer la verdad sobre los puntos cuestionados y dictar una sentencia lo más apegada a derecho, con la facultad que le confiere al suscrito juzgador, el artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles en el



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

***Estado de Chiapas, se ordena la ampliación de la prueba pericial en Grafoscopia a efecto de verificar si la firma estampada en la escritura pública que se reclama la nulidad, fue opuesta por la litisconsorte \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, por lo que se ordena la toma de muestras y escrituras para los dictámenes periciales correspondientes.***

*Proveído que vulnera los artículos 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, y demás relativos y aplicables al Código de procedimientos civiles vigente en la entidad, debido a que los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que únicamente se niegue reiteradamente la firma del suscrito como única persona como es el caso de la estampada en la escritura pública número 1,375 mil trescientos setenta y cinco, volumen 31 de enero de 2012, que no fue puesta de puño y letra de \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, y en ningún momento se pudo en duda la firma estampada por la litisconsorte \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, para analizar las firmas en él plasmadas, y esto no implica que el resultado del litigio se deje a su voluntad, porque se cualquier manera esa negativa u oposición debe tener una consecuencia jurídica que incida en el resultado del juicio;*

*No obstante lo anterior, debe apuntarse, que cuando una parte se niegue o se oponga en establecer una sanción para permitir el desahogo de la prueba pericial grafoscópica que analice la autenticidad de las firmas, debe analizar el juzgador que se encuentran facultados para disipar toda disputa, amén de existir silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, con la aplicación debida de los principios generales del derecho, toda vez que bajo ninguna circunstancia podrán dejar de resolver la controversia suscitada ni permitir que el litigio quede a merced de la voluntad de una de las partes que pretenda beneficiarse de su propio dolo.*

*Por ende, los peritos ratificarán sus dictámenes en base únicamente a las objeciones que se hagan de la autenticidad de las firmas a que se duele estableciendo la obligación del juzgador de que al ser una prueba constituida fuera de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente para hacer indudable su valor. Además, con ello se evita una posible suplantación del perito.*

*En esas condiciones, la autenticidad de la prueba pericial mediante el perfeccionamiento formal, no puede estar supeditada a su objeción o impugnación, ni mucho menos a la existencia de una creencia subjetiva de la autoridad investigadora o el Juez que esté libre de dudas, sino de la certeza de la confirmación de quien realmente emitió el dictamen pericial. En consecuencia, como ese dictamen no ratificado es una prueba imperfecta, carente de valor probatorio, procede que se ordene su ratificación.*

*Razón por la cual con motivo de la objeción de falsedad de la firma de un documento o instrumento notarial en el que se ofrece la prueba pericial en grafoscopia y caligrafía, y la autoridad judicial, con base en lo señalado por*



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*las partes, establece las firmas que servirán de base para el cotejo, el o los peritos deberán rendir su dictamen exclusivamente con base en esos elementos señalados y autorizados como indubitados.*

*No es obstáculo a lo anterior que la parte contraria del oferente no hubiera desahogado la vista con la admisión de la pericial y, por ende, no señalara perito de su parte ni ampliaría el cuestionario respectivo, pues el procedimiento garantiza la transparencia y da certeza a las partes de la forma en que habrá de desahogarse la prueba pericial ofrecida con motivo de una objeción de falsedad de firma de documento. Por ello, una vez que se admite y ordena el desahogo de la prueba pericial, las partes tienen la certeza de que ésta se deberá desahogar en los estrictos términos en que fue ordenado; de ahí que, si los peritos desatienden esa instrucción, ello será en demerito de los derechos de defensa y contradicción de las partes, lo cual, evidentemente, debe tener impacto en la valoración que de esa prueba se haga. En consecuencia, el desahogo de la prueba pericial debe constreñirse a lo estrictamente ordenado por el Juez y sólo deben tomarse en cuenta, para efecto del cotejo de firmas, las ofrecidas como indubitables.*

*Situación que con lleva si el suscrito objetara la firma que calza en el instrumento notarial alegado de nulidad se debe probar los hechos constitutivos de la acción y el demandado los de sus excepciones, por lo que si una de las partes ofrece para tal efecto diversos documentos, y su contraria los objeta afirmando no haber sido ella quien los firmó, debe demostrar esa objeción, pues no basta que se adviertan diferencias entre las firmas que contienen los documentos objetados, con las que calzan alguna de las promociones presentadas en el juicio, por más notorias que pudieran parecer esas diferencias, puesto que si bien, en principio, los hechos negativos no son susceptibles de probarse, cuando la negativa envuelve la afirmación de un hecho, ésta debe acreditarse como lo establece el artículo 265 del ordenamiento legal citado.*

*Por lo tanto, el juzgador no puede declarar que si la objeción de una firma estampada en la escritura pública numero 1,375 mil trescientos setenta y cinco, volumen 31 treinta y uno de fecha 31 de enero de 2012 dos mil doce, fue puesta de puño y letra por \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , en donde se reclama no haberlo firmado por lo que se pide la nulidad absoluta a pesar de que se advierte que se trata de un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio limitado en cuanto a su objeto e irrevocable otorgado no solo por \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* sino también por la litisconsorte \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , en nada conlleva ordenar la toma de muestras y escrituras de una persona de la cual no se objetó y controvertió de falsedad de la firma.*

*Lo anterior que debido a la falsedad o autenticidad de firmas es una cuestión que no debe resolverse por el simple cotejo que personalmente pueda hacer la autoridad judicial, sino mediante la prueba pericial desahogada con ese propósito, pues ese cotejo requiere de elementos científicos o técnicos que no pueden ser reemplazados con una*



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*confrontación a simple vista por el juzgador, en virtud de que aun cuando, en apariencia, fuera notoria la discrepancia entre las firmas que se cuestionan y aquellas que se designan como indubitadas, existe la posibilidad de que todas correspondan a la misma persona; esto es, que hayan sido estampadas, aunque con el disimulo, del puño y letra de un solo individuo. De modo que cuando se impugna la falsedad de una firma, por mandato expreso de la ley procesal aplicable, se requieren de elementos científicos o técnicos propios de una prueba pericial en grafoscopia y caligrafía.*

**TIENE APLICACIÓN**

*Registro digital: 181554*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Novena Época*

*Materias(s): Civil*

*Tesis: VI.3o.C.99 C*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Mayo de 2004, página 1781*

*Tipo: Aislada*

**FIRMAS CONTENIDAS EN DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN UN JUICIO. LA PARTE QUE LAS OBJETA NEGANDO HABERLAS PUESTO DEBE OFRECER LA PRUEBA PERICIAL PARA ACREDITAR SU OBJECCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).**

*De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el actor debe probar los hechos constitutivos de la acción y el demandado los de sus excepciones, por lo que si una de las partes ofrece para tal efecto diversos documentos, y su contraria los objeta afirmando no haber sido ella quien los firmó, debe demostrar esa objeción, pues no basta que se adviertan diferencias entre las firmas que contienen los documentos objetados, con las que calzan alguna de las promociones presentadas en el juicio, por más notorias que pudieran parecer esas diferencias, puesto que si bien, en principio, los hechos negativos no son susceptibles de probarse, cuando la negativa envuelve la afirmación de un hecho, ésta debe acreditarse como lo establece el artículo 265 del ordenamiento legal citado. Por tanto, el juzgador no puede declarar que las firmas objetadas no fueron puestas por la parte a quien se atribuyen, sin contar con el auxilio de un perito en la materia.*

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.**

*Amparo directo 31/2004. María de Lourdes Cadena Álvarez. 18 de marzo de 2004. Mayoría de votos. Disidente: Teresa Munguía Sánchez. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: Carlos Humberto Reynúa Longoria.*

**Notas:**

*Por ejecutoria del 8 de septiembre de 2004, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 53/2004-PS, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.*



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*Por ejecutoria del 23 de noviembre de 2011, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 292/2011, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.*

*Registro digital: 164980*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Novena Época*

*Materias(s): Civil*

*Tesis: IV. 1o.C. 103 C*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 3021*

*Tipo: Aislada*

**OBJECCIÓN DE FALSEDAD DE FIRMA. PROCEDE QUE EL JUZGADOR APERCIBA A LA PARTE CONTUMAZ CON TENERLA POR CIERTA, CUANDO SE NIEGUE INJUSTIFICADAMENTE A PROPORCIONAR EL DOCUMENTO ORIGINAL PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPIA RESPECTIVA PUES, DE LO CONTRARIO, SU DESLEAL PROCEDER LE ACARREARÍA UN BENEFICIO PROCESAL EN DETRIMENTO DE QUIEN FORMULÓ AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).**

*El hecho de que la parte demandada se niegue reiteradamente, a pesar de la aplicación de las medidas de apremio, a allegar un documento original para analizar las firmas en él plasmadas, no implica que el resultado del litigio se deje a su voluntad, porque de cualquier manera esa negativa u oposición debe tener una consecuencia jurídica que incida en el resultado del juicio; sin embargo, esto no se plasma expresamente en la ley. No obstante lo anterior, debe apuntarse, que cuando una parte se niegue o se oponga a cumplir con el mandato que le ordene allegar un documento, atendiendo al principio de buena fe del proceso, y ante la ineficacia de los medios de apremio, es menester que los juzgadores se conduzcan conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, al resolver la cuestión jurídica de naturaleza civil lato sensu (entre la que se encuentra la ley procesal civil), deberán hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, fundándose en los principios generales del derecho. Así, se da la posibilidad de que apliquen diversos medios de interpretación, y ante la laguna que existe en la codificación adjetiva civil del Estado, en establecer una sanción para el caso de negativa injustificada y contumaz en allegar los documentos originales en detrimento de la parte que pretende demostrar la falsedad de la firma, se tiene que recurrir al método de integración de la norma. Así tenemos que si bien la legislación del Estado de Nuevo León, no contiene norma expresa que precise la consecuencia de la negativa a allegar el original para permitir el desahogo de la prueba pericial grafoscópica que analice la autenticidad de las firmas, debe recordarse que los Jueces se encuentran facultados para disipar toda disputa, amén de existir silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, con la aplicación debida de los principios generales del derecho, toda vez que bajo ninguna circunstancia podrán dejar de resolver la controversia suscitada ni permitir que el litigio quede a merced de la voluntad de una de las partes que pretenda beneficiarse de su propio dolo. Por tanto, se considera que para subsanar esa laguna legal deben aplicarse, por analogía, las disposiciones concernientes a los principios reguladores de la confesión ficta*



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*contenidos en el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles local, conforme a los cuales se tiene por confesa a la parte citada a absolver posiciones cuando se niega a declarar o no comparece a la diligencia sin justa causa. En la inteligencia de que, como sucede con cualquier prueba ficta, en la especie, la presunción derivará de la omisión del demandado de permitir el desahogo de la prueba pericial para dilucidar la autenticidad de las firmas y, en su caso, deberá estar adminiculada con otras pruebas.*

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.**

*Amparo directo 225/2009. Cayetano Chapa González, su sucesión y otra. 10 de septiembre de 2009. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Arturo Ramírez Pérez. Ponente: José Manuel Quintero Montes. Secretario: Helmuth Gerd Putz Botello.*

*Registro digital: 2011671*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Décima Época*

*Materias(s): Constitucional, Penal*

*Tesis: XX.1o.P.C.1 P (10a.)*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, página 2790*

*Tipo: Aislada*

**DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 180 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS ABROGADO, AL ESTABLECER QUE LOS PERITOS LOS RATIFICARÁN EN EL CASO DE QUE SEAN OBJETADOS DE FALSEDAD O EL MINISTERIO PÚBLICO O EL JUEZ LO ESTIMEN NECESARIO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 16 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.**

*El precepto local citado, al establecer que los peritos ratificarán sus dictámenes en el caso de que sean objetados de falsedad o el Ministerio Público o el Juez lo estimen necesario, viola los principios de certeza y seguridad jurídica, previstos en los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tratándose de una prueba constituida fuera de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente para hacer indudable su valor. Además, con ello se evita una posible suplantación del perito. En esas condiciones, la autenticidad de la prueba pericial mediante el perfeccionamiento formal que exige la primera parte del mencionado artículo 180, no puede estar supeditada a su objeción o impugnación, ni mucho menos a la existencia de una creencia subjetiva de la autoridad investigadora o del Juez que esté libre de dudas, sino de la certeza de la confirmación de quien realmente emitió el dictamen pericial. En consecuencia, como ese dictamen no ratificado es una prueba imperfecta, carente de valor probatorio, procede que se ordene su ratificación.*

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.**

*Amparo directo 315/2015. 4 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Álvaro Mauricio Zenteno Chacón.*



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*Amparo directo 96/2016. 18 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Sánchez Montalvo. Secretaria: María Fernanda Burguete Brindis.*

*Amparo directo 45/2015. 31 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mason Cal y Mayor. Secretario: Antonio Artemio Maldonado Cruz.*

*Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.*

*Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.*

*Registro digital: 2022839*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Décima Época*

*Materias(s): Civil*

*Tesis: I.110.C.138 C (10a.)*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 3026*

*Tipo: Aislada*

**PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPIA Y CALIGRAFIA. SU DESAHOGO DEBE CONSTREÑIRSE A LO ERICTAMENTE ORDENADO POR EL JUEZ Y SÓLO DEBEN TOMARSE EN CUENTA, PARA EFECTO DEL COTEJO DE FIRMAS, LAS OFRECIDAS COMO INDUBITABLES, AUN CUANDO LA PARTE CONTRARIA DEL OFERENTE NO DESAHOGUE LA VISTA DE SU ADMISION (LEGISLACION APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MEXICO).**

*Cuando con motivo de la objeción de falsedad de un documento se ofrece la prueba pericial en grafoscopia y caligrafia, y la autoridad judicial, con base en lo señalado por las partes, establece las firmas que servirán de base para el cotejo, el o los peritos deberán rendir su dictamen exclusivamente con base en esos elementos señalados y autorizados como indubitados. No es obstáculo a lo anterior que la parte contraria del oferente no hubiera desahogado la vista con la admisión de la pericial y, por ende, no señalara perito de su parte ni ampliara el cuestionario respectivo, pues el procedimiento previsto en los artículos 345 y 386 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, garantiza la transparencia y da certeza a las partes de la forma en que habrá de desahogarse la prueba pericial ofrecida con motivo de una objeción de falsedad de documento. Por ello, una vez que se admite y ordena el desahogo de la prueba pericial, las partes tienen la certeza de que ésta se deberá desahogar en los estrictos términos en que fue ordenado; de ahí que si los peritos desatienden esa instrucción, ello será en demérito de los derechos de defensa y contradicción de las partes, lo cual, evidentemente, debe tener impacto en la valoración que de esa prueba se haga. En consecuencia, el desahogo de la*



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*prueba pericial debe constreñirse a lo estrictamente ordenado por el Juez y sólo deben tomarse en cuenta, para efecto del cotejo de firmas, las ofrecidas como indubitables.*

**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.**

*Amparo directo 247/2020. Juan Vega Pineda y otra. 26 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García González.*

*Esta tesis se publicó el viernes 12 de marzo de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.*

*Registro digital: 2022817*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Décima Época*

*Materias(s): Civil*

*Tesis: I. 11o.C. 136 C (10a.)*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 2985*

*Tipo: Aislada*

**OBJECCIÓN DE FALSEDAD DE FIRMAS. LA PRUEBA IDÓNEA PARA RESOLVER ESA CUESTIÓN ES LA PERICIAL EN GRAFOSCOPIA Y CALIGRAFÍA, POR LO QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL NO PUEDE BASAR SU DECISIÓN EN EL SIMPLE COTEJO QUE REALICE (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).**

*Conforme a lo previsto en los artículos 345 y 386 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la falsedad o autenticidad de firmas es una cuestión que no debe resolverse por el simple cotejo que personalmente pueda hacer la autoridad judicial, sino mediante la prueba pericial desahogada con ese propósito, pues ese cotejo requiere de elementos científicos o técnicos que no pueden ser reemplazados con una confrontación a simple vista por el juzgador, en virtud de que aun cuando, en apariencia, fuera notoria la discrepancia entre las firmas que se cuestionan y aquellas que se designan como indubitadas, existe la posibilidad de que todas correspondan a la misma persona; esto es, que hayan sido estampadas, aunque con disimulo, del puño y letra de un solo individuo. De modo que cuando se impugna la falsedad de una firma, por mandato expreso de la ley procesal aplicable, se requieren de elementos científicos o técnicos propios de una prueba pericial en grafoscopia y caligrafía.*

**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.**

*Amparo directo 247/2020. Juan Vega Pineda y otra. 26 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García González.*

*Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 36/2024 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que mediante*



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*auto de presidencia del 13 de febrero de 2024, declaró su incompetencia legal para conocer del asunto y ordenó la remisión de los autos al Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México para su conocimiento y resolución.*

*Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 95/2024, pendiente de resolverse por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.*

*Esta tesis se publicó el viernes 12 de marzo de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.*

*Registro digital: 2011819*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Décima Época*

*Materias(s): Administrativa*

*Tesis: I.1o.A.E.154 A (10a.)*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2964*

*Tipo: Aislada*

**PRUEBA PERICIAL DE CONTENIDO CIENTÍFICO O TÉCNICO. ESTÁNDAR DE CONFIABILIDAD AL QUE DEBE SUJETARSE PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES SE LE RECONOZCA EFICACIA PROBATORIA.**

*El artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Telecomunicaciones abrogada, en términos de sus artículos 2o. y 8, fracción V, respectivamente, dispone que el valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal. La circunstancia precedente hace necesario que, ante la presentación de dictámenes científicos o técnicos expertos, el juzgador de amparo especializado en telecomunicaciones deba determinar, previamente, si los razonamientos subyacentes en ellos y la metodología ahí empleada son científica o técnicamente válidos y si pueden aplicarse a los hechos sujetos a demostración. Así, la calificación de confiabilidad del dictamen experto dependerá directamente del enfoque que adopte el juzgador, el cual debe determinarse no por las conclusiones aportadas por el perito, sino por los principios y metodología empleados. En ese sentido, se postulan como criterios orientadores para admitir o excluir las pruebas periciales de contenido científico o técnico, o bien, algunos aspectos específicos de éstas: a) la controlabilidad y falseabilidad de la teoría en la que se fundamentan; b) el porcentaje de error conocido o potencial, así como el cumplimiento de los estándares correspondientes a la técnica empleada; c) las publicaciones de la teoría o la técnica que hubieren sido sometidas al control de otros expertos; y, d) la existencia de un consenso general de la comunidad científica o técnica interesada.*

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.**



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

---

*Amparo en revisión 9/2015. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y otra. 10 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.*

*Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 63/2023, pendiente de resolverse por el Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.*

*Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.*

*Pues al advertirse que las partes deben ofrecer sus pruebas en los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de la vista de éstas, expresando el hecho o los hechos a demostrar, las razones por las que considera que demostrarán sus afirmaciones, y proporcionando los datos idóneos dependiendo el tipo de probanza. Debe sostenerse que uno de los objetos de la audiencia es la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas; por lo que, de ser admitidas, desechada o por no presentada en el que el Juez determinará la forma en que las partes deberán prepararlas para su desahogo.*

*En ese sentido, se tiene que las etapas en que éste discurre, son diversas al resto pues en él, una vez que las partes han presentado los escritos y ofrecido las pruebas que consideran pertinentes, en la que, entre otras cuestiones, se hará la calificación sobre la admisibilidad de las probanzas que serán desahogadas en audiencia, acto en el cual, se decidirá el fondo del asunto; dinámica en la que puede inferirse que no existe un término probatorio.*

*Lo anterior, porque la facultad que otorga a las partes para ofrecer pruebas en la demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vistas de éstas, en cuanto establece como parte de los requisitos que deben cumplirse al presentar la demanda que se incluya la relación sucinta y clara de los hechos en los que se funda la petición y el ofrecimiento de las pruebas que las partes pretenda rendir en el juicio, las cuales deben tener relación con esos hechos.*

*Razón por la cual a fin de determinar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas al desahogar la vista relativa, debe analizarse si se relacionan con hechos nuevos expuestos al plantear excepciones en la contestación de la demanda, supuesto en el cual deben admitirse, o bien, si por el contrario, la actora tenía la carga procesal de ofrecerlas desde su escrito inicial, por estar relacionadas con los hechos en que se basa su acción, caso en el cual deben desecharse en atención al principio de igualdad de la propia codificación, conforme al cual no es válido otorgar una mayor oportunidad probatoria a los demandados para reforzar los elementos aportados en su demanda.*

*la prueba posible es un concepto utilitario concerniente a la partición en juicio del elemento de convicción que ha estado supeditado a las fases*



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

---

*procesales tradicionales, como son el procedimiento y la sentencia; dentro de estas instancias, la prueba transita por tres momentos, mientras que el cuarto está implícito en la sentencia.*

*Así, se tiene que el primero es el ofrecimiento de las pruebas, el cual corre a cargo de las partes; la admisión, es decir, el segundo, le compete al Juez; finalmente, el tercero, el desahogo de la prueba, implica la participación de todos los involucrados. Todo esto ocurre durante la fase del procedimiento.*

*Por su parte, el cuarto atañe exclusivamente al Juez y se refiere, tanto a la valoración de la prueba (lo que se hace en la sentencia interlocutoria), como a su facultad para calificar el grado de convencimiento que producen los datos de prueba aportados por las partes, admitidos y finalmente desahogados (incidencia lógica y jurídica, proporcional a su importancia dentro del conjunto probatorio). Es en el procedimiento familiar en donde este esquema es analizado con nuevos bríos, lo que ocasiona aportaciones novedosas referente no solo a la fase judicial, sino prejudicial del conflicto, con la diferencia de que ahora se introducen dos nuevos conceptos:*

*El anuncio de la prueba consiste en el posicionamiento de los interesados en cuanto a advertir, con miras a la negociación y posible conciliación, los elementos o datos de prueba con que cuentan.*

*Por su parte, el descubrimiento implica la demostración, en el plano extrajudicial, todavía, de la verdadera existencia de los elementos anunciados. Así, es posible afirmar que el anuncio implica por sí mismo un reto, en cuanto a las posiciones de éxito; no obstante, el descubrimiento evidencia la posibilidad de la existencia real de esos datos y el riesgo que puede representarle a la contraparte su exhibición en la vía judicial; por esos motivos, la necesidad de que las partes aporten en juicio los elementos a su alcance se encuentra limitada, siempre en función material, primero en cuanto a la disponibilidad de las pruebas que demuestren sus posiciones en juicio; segundo, en cuanto al elemento de derecho, aunque igualmente en la idoneidad probatoria de cada uno de esos elementos, lo cual será ponderado prudentemente por el Juez en el momento de hacer la calificación sobre idoneidad, que es lo que definitiva determinará si lo conducente es admitir la prueba, en función de los hechos planteados en juicio.*

*De ahí que pueda advertirse que en todos los casos existe un punto de hecho que debe ser demostrado por las partes: el actor, como elemento de su acción y el demandado como sustento de sus excepciones y naturalmente emerge lo que se denomina estándar probatorio, esto es, la necesidad de que las pruebas sean idóneas y suficientes para apoyar las posturas de las partes. Este estándar probatorio tiene como característica la intensidad de su representación en juicio, es decir, que no en todos los casos ha de tener la misma formalidad, ni para las partes, ni para el Juez, sino que se mantiene fluctuante en cada tipo de juicio, entre un mínimo y un máximo que deberá ponderarse para exigir lo que se conoce como prueba*



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*posible, sin extralimitar los alcances de la exigencia de prueba, más allá de la mera demostración de los elementos de acción y de las excepciones correspondientes. De lo contrario, el exigir un estándar rígido y máximo de la prueba para determinar su admisibilidad, se constituiría como un requisito insalvable y, por tanto, un obstáculo exacerbado, enervante, para el acceso a la jurisdicción.*

*En resumen, la prueba es aquella que se encuentra al alcance de las partes; por tanto, sus elementos definitorios estriban en la idoneidad en cuanto al hecho a probar; la accesibilidad en cuanto a la facilidad de demostración en juicio, lo verisímil de su materialización y, finalmente, la convicción que pueda producir al Juez. Éstos son, entonces, los tres elementos de la prueba posible (los cuales se ubican, conforme la teoría tradicional y como se indicó, en la fase procesal): idoneidad, accesibilidad o posibilidad en la disposición de la prueba y, por último, la valoración designada al Juez, con el carácter de prueba capaz de producir convicción. Elementos que, no es casualidad, hacen ecuación con las notas que definen el alcance del derecho a la prueba: pertinencia, diligencia y relevancia, aunque aquí lo que se requiere destacar mediante el concepto de prueba posible, es la importancia de no poner trabas ni a la admisión de la prueba, ni a su valoración, llegando el momento de sentenciar. Consecuentemente, el concepto de prueba posible contiene implícito tanto al debido proceso como al acceso a la tutela jurisdiccional efectiva (en sus vertientes de derecho a la defensa y acceso a la jurisdicción, respectivamente), que debe ser apreciado-como reiteradamente lo ha estimado este tribunal-, bajo la premisa de flexibilizar lo procesal y privilegiar lo sustantivo; óptica que empata a la perfección con el reciente mandato constitucional de optimización de las vías judiciales, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a resolver referentemente las cuestiones de fondo sobre los formalismos procesales.*

#### **TIENE APLICACIÓN**

*Ilustra lo anterior*

*Registro digital: 2012352*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Décima Época*

*Materias(s): Civil*

*Tesis: XII.C.2 C (10a.)*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2685*



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

*Tipo: Aislada*

**PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO EXISTE TÉRMINO PROBATORIO, ATENTO A LAS REGLAS ESPECIALES QUE RIGEN SU OFRECIMIENTO Y ADMISIBILIDAD, QUE SON DIVERSAS A LAS REGLAS GENERALES DEL RESTO DE LOS JUICIOS MERCANTILES.**

*Del artículo 1390 Bis 13 del Código de Comercio, se advierte que las partes deben ofrecer sus pruebas en los escritos de demanda, contestación, reconvencción, contestación a la reconvencción y desahogo de vista de éstas, expresando el hecho o hechos a demostrar, las razones por las que considera que demostrarán sus afirmaciones, y proporcionando los datos idóneos dependiendo el tipo de probanza. Por su parte, el diverso 1390 Bis 32, fracción V, señala que uno de los objetos de la audiencia preliminar es la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas; por lo que, de ser admitidas, conforme al numeral 1390 Bis 37, el Juez determinará la forma en que las partes deberán prepararlas para su desahogo en la audiencia de juicio, la cual, constituye la última parte del procedimiento oral, dado que en ella se dicta la sentencia correspondiente. En ese sentido, del análisis de la estructura del juicio oral mercantil, se tiene que las etapas en que éste discurre, son diversas al resto de los juicios mercantiles, pues en él, una vez que las partes han presentado los escritos a que se refiere el citado artículo 1390 Bis 13 y ofrecen las pruebas que consideran pertinentes, se lleva a cabo la audiencia preliminar, en la que, entre otras cuestiones, se hará la calificación sobre la admisibilidad de las probanzas que serán desahogadas en audiencia de juicio, acto en el cual, se decidirá el fondo del asunto; dinámica de la que puede inferirse que no existe un término probatorio.*

**TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.**

*Amparo directo 1058/2014. Mapfre Tepeyac, S.A. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Fernández Martínez. Secretaria: Jessica Elizabeth Tejeda López.*

*Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.*

*Registro digital: 2019795*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Décima Época*

*Materias(s): Constitucional, Común, Civil*

*Tesis: I.3o.C. 103 K (10a.)*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2719*

*Tipo: Aislada*

**PRUEBA POSIBLE. CONCEPTO, ELEMENTOS DEFINITORIOS Y SU VINCULACIÓN CON EL DERECHO A LA PRUEBA.**

Vinculado con el derecho a la prueba, la prueba posible es un concepto utilitario concerniente a la participación en juicio del elemento de convicción que ha estado supeditado a las fases procesales tradicionales, como son el procedimiento y la sentencia; dentro de estas instancias, la prueba transita por tres momentos, mientras que el cuarto está implícito en la sentencia. Así, se tiene que el primero es el ofrecimiento de las pruebas, el cual corre a cargo de las partes; la admisión, es decir, el segundo, le compete al Juez; finalmente, el tercero, el desahogo de la prueba, implica la participación de todos los involucrados. Todo esto ocurre durante la fase del procedimiento. Por su parte, el cuarto atañe exclusivamente al Juez y se refiere, tanto a la valoración de la prueba (lo que se hace en la sentencia), como a su facultad para calificar el grado de convencimiento que producen los datos de prueba aportados por las partes, admitidos y finalmente desahogados (incidencia lógica y jurídica, proporcional a su importancia dentro del conjunto probatorio). Es en el procedimiento penal en donde este esquema es analizado con nuevos bríos, lo que ocasiona aportaciones novedosas referentes no sólo a la fase judicial, sino prejudicial del conflicto, con la diferencia de que ahora se introducen dos nuevos conceptos: el primero, conocido como "anuncio" y el segundo correspondiente al "descubrimiento" de los datos de prueba. El anuncio de la prueba consiste en el posicionamiento de los interesados en cuanto a advertir, con miras a la negociación y posible conciliación, los elementos o datos de prueba con que cuentan. Por su parte, el descubrimiento implica la demostración, en el plano extrajudicial, todavía, de la verdadera existencia de los elementos anunciados. Así, es posible afirmar que el anuncio implica por sí mismo un reto, en cuanto a las posiciones de éxito; no obstante, el descubrimiento evidencia la posibilidad de la existencia real de esos datos y el riesgo que puede representar a la contraparte su exhibición en la vía judicial; por esos motivos, la necesidad de que las partes aporten en juicio los elementos a su alcance se encuentra limitada, siempre en función material, primero, en cuanto a la disponibilidad de las pruebas que demuestren sus posiciones en juicio; segundo, en cuanto al elemento de derecho, aunque igualmente en la idoneidad probatoria de cada uno de esos elementos, lo cual será ponderado prudentemente por el Juez en el momento de hacer la calificación sobre idoneidad, que es lo que en definitiva determinará si lo conducente es admitir la prueba, en función de los hechos planteados en juicio. De ahí que pueda advertirse que en todos los casos existe un punto de hecho que debe ser demostrado por las partes: el actor, como elemento de su acción y el demandado como sustento de sus excepciones y naturalmente emerge lo que se denomina estándar probatorio, esto es, la necesidad de que las pruebas sean idóneas y suficientes para apoyar las posturas de las partes. Este estándar probatorio tiene como característica la intensidad de su representación en juicio, es decir, que no en todos los casos ha de tener la misma formalidad, ni para las partes, ni para el Juez, sino que se mantiene fluctuante en cada tipo de juicio, entre un mínimo y un máximo que deberá ponderarse para exigir lo que se conoce como prueba posible, sin extralimitar los alcances de la exigencia de prueba, más allá de la mera demostración de los elementos de acción y de las excepciones



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

correspondientes. De lo contrario, el exigir un estándar rígido y máximo de la prueba para determinar su admisibilidad, se constituiría como un requisito insalvable y, por tanto, un obstáculo exacerbado, enervante, para el acceso a la jurisdicción. En resumen, la prueba posible es aquella que se encuentra al alcance de las partes; por tanto, sus elementos definitorios estriban en la idoneidad en cuanto al hecho a probar; la accesibilidad en cuanto a la facilidad de demostración en juicio, lo verosímil de su materialización y, finalmente, la convicción que pueda producir al Juez. Éstos son, entonces, los tres elementos de la prueba posible (los cuales se ubican, conforme la teoría tradicional y como se indicó, en la fase procesal): idoneidad, accesibilidad o posibilidad en la disposición de la prueba y, por último, la valoración designada al Juez, con el carácter de prueba capaz de producir convicción. Elementos que, no es casualidad, hacen ecuación con las notas que definen el alcance del derecho a la prueba: pertinencia, diligencia y relevancia, aunque aquí lo que se quiere destacar mediante el concepto de prueba posible, es la importancia de no poner trabas ni a la admisión de la prueba, ni a su valoración, llegado el momento de sentenciar. Consecuentemente, el concepto de prueba posible contiene implícito tanto al debido proceso como al acceso a la tutela jurisdiccional efectiva (en sus vertientes de derecho a la defensa y acceso a la jurisdicción, respectivamente), que debe ser apreciado –como reiteradamente lo ha estimado este tribunal–, bajo la premisa de flexibilizar lo procesal y privilegiar lo sustantivo; óptica que empata a la perfección con el reciente mandato constitucional de optimización de las vías judiciales, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a resolver preferentemente las cuestiones de fondo sobre los formalismos procesales.

#### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 285/2018. Banco Santander (México), S.A., I.B.M., Grupo Financiero Santander México. 23 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de mayo de 2019 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

**En tal virtud debe revocarse el auto de fecha 26 de abril del año 2024, que ordena la reposición del procedimiento para el desahogo de pruebas dejadas de desahogar según el juzgador, surtiendo sus efectos el 30 de abril del año 2024...” (SIC)**

**CUARTO.** Ahora bien, del análisis a los agravios expresados por el inconforme, así como a las constancias que integran el sumario, mismas que merecen valor probatorio de conformidad con los artículos



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

334, fracción VIII y 400 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, debe decirse que los motivos de disenso serán estudiados en el orden en que fueron expuestos.

Antes de ingresar al estudio de los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, para una mejor intelección del asunto que nos ocupa, precisa traer a colación algunas actuaciones judiciales, como a continuación se señalan:

- Por escrito de 17 de abril de 2017, \*\*\*\*\*, compareció a juicio demandando de \*\*\*\*\*, Licenciada CRISTINA GABRIELA BONIFAZ VILLAR, Notaria Pública número 86 del Estado de Chiapas, Licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, Notario Público número 178 del Estado de Chiapas y DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, la NULIDAD ABSOLUTA de la compraventa contenida en la escritura número 541, volumen número 8, de fecha 24 de octubre de 2014, pasada ante la fe del Notario Público 178 del Estado; la NULIDAD ABSOLUTA del instrumento público número 1375, volumen 31, de fecha 31 de enero de 2012, pasada ante la fe del Notario Público número 86 del Estado; la cancelación total tanto en el protocolo de los notarios demandados, como en el apéndice respectivo de dicho testimonio y la cancelación total de la inscripción de la escritura 541, volumen número 8, y de las anotaciones marginales que se hubieran impuesto en su antecedente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el orden señalado por el demandante en sus prestaciones.
- En auto de fecha 16 de mayo de 2017, se admitió a trámite la demanda en sus términos, ordenándose emplazar a juicio a los demandados, quienes una vez llamados a juicio produjeron contestación en tiempo y forma \*\*\*\*\*, mediante escrito de 7 de julio de 2017, quien opuso como excepción LITISCONSORCIO PASIVO respecto de la señora \*\*\*\*\*, al haber otorgado el poder a su favor y de su esposa \*\*\*\*\*, por su parte \*\*\*\*\*, dio contestación a la demanda instada en su contra mediante escrito de 8 de enero de 2018; así también, el demandado Licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, Notario Público número 178 del Estado de Chiapas, produjo contestación a la demanda mediante libelo de fecha 24 de mayo de 2024; y, finalmente, la demandada Licenciada CRISTINA GABRIELA BONIFAZ VILLAR. Titular de



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

la Notaría Pública número 86 del Estado de Chiapas, dio contestación a la demanda en curso de 20 de junio de 2018.

• Se sigue que, mediante proveído de 7 de enero de 2019, respecto del litisconsorcio pasivo que realizara \*\*\*\* \*\*\*\*\* se dijo necesario llamar a juicio a \*\*\*\*\* a fin de integrar debidamente la relación jurídico procesal y no vulnerar su garantía de audiencia, por tanto, se previno a la parte actora y al codemandado \*\*\*\* \*\*\*\*\* para que exhibieran copias simples de su escrito de demanda y contestación, respectivamente, debiendo proporcionar también el domicilio cierto de \*\*\*\*\* para su emplazamiento; asimismo, al advertir de autos que el demandado DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESA CIUDAD no dio contestación a la demanda, se le tuvo por confeso de los hechos que dejó de contestar; al tiempo que se dio cuenta de la contestación de demanda efectuada por \*\*\*\*\* y el NOTARIO PÚBLICO NUMERO 178 DEL ESTADO, y en cuanto al litisconsorcio pasivo que éste último hizo valer en contra de \*\*\*\*\* se le dijo que su petición se encontraba concedida en líneas que anteceden.

• Asimismo, por auto de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se facultó al Actuario Judicial adscrito al Juzgado para correr traslado y emplazar a la litisconsorte pasivo necesario \*\*\*\*\* con copias del escrito de demanda inicial y de la contestación realizadas en autos, en los términos ordenados en proveído de 16 de mayo de 2017 (auto admisorio de demanda) para que dentro de nueve días produjera contestación y opusiera excepciones si tuviera alguna que hacer valer, con el correspondiente apercibimiento de ley para el caso de no producir contestación a la misma, habiendo sido emplazada la antes mencionada en fecha 10 de octubre de 2019, la que produjo contestación a la demanda mediante libelo de 23 de octubre de 2019, sin que opusiera excepción alguna, aún cuando refirió con relación a las prestaciones reclamadas a \*\*\*\* \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* que las marcadas con los incisos a) y b), que deben ser declarados nulos los actos contenidos en los instrumentos que ahí se mencionan, porque el actor no intervino y ella no ha otorgado poder general para pleitos y cobranzas, a efecto de que \*\*\*\*\* pudiera vender su propiedad a \*\*\*\*\* respecto al bien descrito por el actor \*\*\*\*\*; habiendo ofertado de su parte, únicamente las pruebas que a continuación se señalan: CONFESIONAL a cargo de \*\*\*\* \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* las DOCUMENTALES PUBLICAS exhibidas por el actor y que la demandada de mérito hizo suyas consistentes en las copias certificadas de las escrituras públicas número 35,428, del libro 1,489, de fecha 20 de febrero de 2008, así



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

como la número 541, volumen número 8, de fecha 24 de octubre de 2014 y la diversa 1,375, volumen 31 de fecha 31 de enero de 2012, la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.

• Virtud de lo anterior, en auto de 30 de octubre de 2019, se dio cuenta del escrito de contestación de demanda presentado por \*\*\*\*\* y se dictó auto admisorio de pruebas, admitiéndose del actor, entre otras, la PERICIAL EN GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTOSCOPIA, a cargo del perito designado por éste, el C. JOSE ALBERTO FLORES DIAZ, misma que debía versar sobre los puntos ofrecidos por la parte actora y los ofertados por el demandado \*\*\*\*\*, al tratarse de una prueba colegiada; asimismo, se previno a la parte contraria para que dentro de tres días hábiles nombraran perito de su parte en la materia, apercibiéndoles que de no hacerlo en dicho término, el Juzgado a petición de parte lo designaría en su rebeldía; empero, en cuanto al demandado \*\*\*\*\*, se le dejó de prevenir por cuanto también ofertó dicha probanza y nombró como su perito a CARLOS GOMEZ NARCIA, teniéndose por hecha la designación de su perito en la materia. En ese sentido, la prueba ofertada por el actor debía versar en: Determinar si la firma que se encuentra estampada en el documento público número 1375, volumen 31, fechado el 31 de enero de dos mil doce, que contiene poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio limitado, pasada ante la fe del Notario Público número 86 del Estado de Chiapas, en la que aparece como otorgante \*\*\*\*\*, si dicha firma fue puesta del puño y letra de éste, y si la misma corresponde a \*\*\*\*\*, probanza que en términos similares ofertó el demandado \*\*\*\*\*. En el auto de referencia se hizo constar respecto al demandado \*\*\*\*\*, que éste hizo suyas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el demandado \*\*\*\*\*.

• Ahora bien, en cuanto a los demandados \*\*\*\*\* a través de su apoderado \*\*\*\*\* (escrito de 8 de noviembre de 2019), y \*\*\*\*\* (escrito de 11 de noviembre de 2019), cada uno en su orden, manifestaron en cuanto a la designación de perito en grafoscopía y documentoscopía, el primero que mediante escrito de contestación a la demanda, hizo suyas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por \*\*\*\*\*, adhiriéndose al resultado de las mismas, por lo que solicitó se tuviera nombrado al perito CARLOS GOMEZ NARCIA en los términos de su contestación de demanda, haciendo lo propio la litisconsorte pasivo necesario \*\*\*\*\*, al adherirse y hacer suya la prueba ofrecida por \*\*\*\*\*, consistente en la pericial en GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTOSCOPIA, y que para tal efecto el actor



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

*nombró como su perito a JOSE ALBERTO FLORES DIAZ, adhiriéndose a dicho dictamen y/o al resultado que emita el citado perito, quien debe sujetarse a los puntos ofrecidos por la parte actora. Petición de la que se dio cuenta en auto de 12 de noviembre de 2019.*

- Por otra parte, el auto de 8 de abril de 2022, se ordenó abrir el periodo de alegatos por el término de tres días a cada una de las partes (actora y demandada) en su orden; los que fueron formulados en tiempo y forma por la parte actora por auto de 26 de abril de 2022; asimismo, en diverso proveído de 10 de mayo de 2022, a petición de parte actora, se citó a las partes para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente, misma que dejó de emitirse según visto de 6 de junio de 2022, por cuanto no obraba en autos copia del oficio JCC/2015-E/A/2018, girado a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado, para que informara si ante alguno de los notarios del Estado, se efectuó alguna operación de compraventa en la que se haya vendido \*\*\*\* \* \*, respecto del bien inmueble ubicado en \*\*\* \* \*, Chiapas; en consecuencia, se ordenó requerir al licenciado Jorge Aguilar Pérez, para que informara el destino dado al oficio de mérito o bien exhibiera el acuse de recibo, requerimiento al que dicho profesionista dio cumplimiento según se advierte del auto de 10 de junio de 2022, por el que se tuvo por exhibido el acuse correspondiente.*

- Rendida la información solicita a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado por sendos oficios, por auto de 30 de noviembre de 2022, de nueva cuenta se citó a las partes para el dictado de la sentencia definitiva que en derecho proceda; empero, por visto de 27 de enero de 2023, nuevamente se dijo que de momento resultaba imposible emitirla, virtud que respecto a la pericial en grafoscopia ofrecida por \*\*\*\*\* si bien se requirió a la parte contraria para que dentro de tres días nombrara perito en la materia, sin embargo no se precisó a quien se refiere con la parte contraria y que en ese sentido, al existir diversidad de demandados a juicio del suscrito juez consideraba importante que el comprador \*\*\*\*\* , se le respetara el derecho de nombrar perito de su parte, y en esa medida, con fundamento en los artículos 286 y 287 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para conocer la verdad sobre los puntos cuestionados, en términos del artículo 773 (sic) del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó realizar el requerimiento precisado a \*\*\*\*\* .*

- Por auto de 9 de junio de 2023, se tuvo por designado al licenciado OSCAR LUIS BARAJAS SANCHEZ, como perito en grafoscopia del demandado \*\*\*\*\* , no siendo conforme éste último, por escrito*



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

de 3 de julio de 2023, interpuso recurso de apelación en contra del auto citado en líneas que anteceden, sin embargo el mismo se dejó de admitir por extemporáneo y por diverso escrito presentado el 8 de agosto siguiente, el demandado \*\*\*\*\* solicitó en atención al contenido del auto de 9 de junio de 2023, donde se le dijo que se le designaría perito en rebeldía, que se le designara al mismo para continuar con el procedimiento; lo que se obsequió en sus términos por auto de 10 de agosto de 2023 designándose en rebeldía al licenciado AMIZADAIN FONSECA ZEA, no obstante del diverso escrito signado por \*\*\*\*\* realizando diversas manifestaciones y solicitando se regularizara el procedimiento, por cuanto el demandado \*\*\*\*\* en su oportunidad hizo suyas todas las pruebas del demandado \*\*\*\* y el resultado de las mismas; se sigue que, mediante escrito de 4 de diciembre de 2023, el licenciado en criminalística AMIZADAIN FONSECA ZEA, Perito designado en rebeldía del demandado \*\*\*\*\* , emitió su correspondiente dictamen pericial, agregándose a sus autos en proveído de 6 de diciembre de 2023, habiendo sido objetado por el actor \*\*\*\*\* por libelo de 13 de diciembre siguiente; lo que se proveyó en auto de 4 de enero de 2024, teniéndose por hecha la objeción e impugnado el dictamen del perito señalado, donde también a petición de la parte demandada se nombró perito tercero en discordia al licenciado OSCAR LUIS BARAJAS SANCHEZ, a quien en auto de 29 de febrero de 2024 se le tuvo por exhibido su correspondiente dictamen pericial.

- Por auto de 13 de marzo de 2024 se tuvo por presentado al accionante objetando el dictamen pericial rendido por el perito tercero en discordia, el cual se proveyó en sus términos teniendo por objetado e impugnado el dictamen correspondiente y respecto a la apertura de los alegatos que solicitara la licenciada Rosby Areli Ceballos Sarmiento, también se obsequió en sus términos, no obstante que este ya se había aperturado en auto de 8 de abril de 2022 como sostuvo el primigenio, por cuanto en auto de 27 de enero de 2023, se ordenó resguardar el derecho del demandado \*\*\*\*\* para designar perito y por ende, dijo, la fase probatoria no se encontraba concluida y en esa medida se regularizó el procedimiento aperturándose la fase de alegatos.

- Por auto de 2 de abril de 2024, se tuvieron por formulados en tiempo y forma los alegatos del actor y de los demandados \*\*\*\* y \*\*\*\*\* . Finalmente, en proveído de 11 de abril del año que transcurre, se citó a las partes para oír sentencia definitiva.

- No obstante, el 26 de abril de 2024, se emitió visto por el que el primigenio determinó entre otras cosas, que revisadas las constancias de autos, no



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

había sido devuelto a ese Juzgado por esta Alzada, la copia certificada del instrumento público número 7,149, libro 100, pasado ante la fe del licenciado Gilberto de Jesús Batiz López, titular de la Notaría Pública número 32 del Estado, que contiene Poder General para Pleitos y Cobranzas otorgado por \*\*\*\*\* a favor de \*\*\*\*\*, y siendo necesario para resolver la excepción de falta de personalidad planteada por los demandados, ordenó requerir su devolución; asimismo, determinó que indebidamente no se designó perito en rebeldía de los demandados Notaria Pública número 86 del Estado y Notario Público número 178 del Estado, así como al Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Chiapa de Corzo, Chiapas, por lo que ordenó requerirles para que dentro de TRES DÍAS siguientes a su notificación, manifiesten a cuál de los dictámenes periciales se adhieren, con el apercibimiento que de no hacerlo se les tendrá adheridos a los dictámenes emitidos en autos. Así como también refiere el juzgador que la citada prueba pericial en Grafoscopia fue desahogada a efecto de verificar si la firma estampada en la escritura pública número 1,375, volumen 31, de 31 de enero de 2012, fue puesta de puño y letra por \*\*\*\*\*, quien refirió no haberlo firmado, pero que, por cuanto el citado instrumento no solo fue otorgado por \*\*\*\*\* sino también por la litisconsorte \*\*\*\*\*, ordenó para conocer la verdad sobre los puntos cuestionados, la ampliación de la prueba pericial en Grafoscopia, a efecto de verificar si la firma estampada en la referida escritura cuya nulidad se reclama, fue puesta por la litisconsorte \*\*\*\*\*, señalando fecha y hora para la diligencia de toma de muestras y ordenando citar a los peritos JOSE ALBERTO FLORES DIAZ, CARLOS GOMEZ NARCIA, JUAN MANUEL LAZOS ROSALES, AMIZADAIN FONSECA ZEA y OSCAR LUIS BARAJAS SANCHEZ, ordenándose además que desahogada la pericial en materia de avalúo (sic), se proceda desahogar la fase de alegatos en autos del expediente 1069/2017. **Siendo este el auto motivo de apelación que nos ocupa.**

Conforme a lo anterior, precisa destacar que como garantía de legalidad a favor de los gobernados, el pacto federal impone que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y; por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas





**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

desahogar según el juzgador, en el apartado que establece: a la licenciada CRISTINA GABRIELA BONIFAZ VILLAR, NOTARIO PUBLICA NUMERO 86 DEL ESTADO, licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 178 DEL ESTADO y DELEGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, manifiesten a cuál de los dictámenes periciales se adhieren en la presente controversia; señalando que dicho proveído vulnera los artículos 45 y 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, debido a que los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoció la posibilidad de que los particulares violen derechos fundamentales cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés público; que sin embargo, aun cuando los notarios ejercen funciones de orden público, no tienen en su calidad de particulares, el carácter de actor, demandado y autoridad responsable para efectos del juicio ordinario civil, ni de amparo, porque si bien al redactar y aprobar escrituras deben observar determinadas reglas, entre ellas la relativa a dejar acreditada la personalidad de quien comparezca en representación de una persona, la omisión en que pudieran incurrir no es un acto equivalente a los de autoridad o parte en un juicio, en virtud que no actúan unilateral, imperativa y coercitivamente, desde una posición de supra a subordinación, al margen del concurso de voluntades de las partes contratantes, sino a petición de éstas, de manera que la voluntad de los gobernados no se encuentra supeditada al acto jurídico que se plasmó en el instrumento público relativo, de forma que tuvieran la obligación inexorable de acatarlo, lo que significa que las funciones que los fedatarios realizan no están previstas en una norma



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

---

general que les otorgue facultades para actuar como parte en un juicio o como una autoridad del Estado, que les permita dictar, ordenar o ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas.

Que por las razones anteriores los notarios públicos y el Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Chiapa de Corzo, sean considerados como parte atendiendo a lo requerido por el juzgador de que se adhieran a uno u otro dictamen, es necesario que los actos reclamados sean equivalentes a los de autoridad, o parte primordial en un juicio ordinario civil; es decir aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que sus funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general, lo que implica que esa circunstancia deriva de la naturaleza y características propias del acto, el cual debe ser unilateral, obligatorio y afectar la esfera jurídica del gobernado.

En ese orden de ideas, sostiene el inconforme, la protocolización de una escritura realizada por un notario público en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la ley del notariado, no es un acto equivalente al de una autoridad ya que no dicta, ordena ni ejecuta un acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza un acto jurídico que celebran las partes, derivado de un acuerdo de voluntades.



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

Por lo tanto, dice, los licenciados CRISTINA GABRIELA BONIFAZ VILLAR, Notario Público número 86 del Estado y LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, Notario Público número 178 del Estado y el DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, que dan autenticidad y forma legal al acto jurídico base de la acción en el juicio natural, no actúan como parte en un juicio o como autoridad para efectos del amparo, sino como simple fedatario de ese acto que fue materia de una controversia jurisdiccional y por ende, pretender que se adhieran a un determinado dictamen pericial resulta improcedente, al no tener interés legítimo ni jurídico en el juicio de nulidad de instrumentos notariales que se ventila, no obstante que exista un derecho consagrado a favor de los particulares para presentar quejas o juicios civiles o denuncias ante la concurrencia de conductas indebidas de servidores públicos, conforme a las correspondientes legislaciones en materia de responsabilidad administrativa; que no era factible que se configurara el interés legítimo, al no existir disposición constitucional o legal que vinculara al notario como parte integral de un juicio ordinario civil al emitir un pronunciamiento específico, al derivar la resolución que debía adoptarse sobre dicha problemática, de una facultad exclusiva de carácter punitivo a cargo del Estado.

Por otra parte, *-señala el inconforme-*, de la ley del Notariado Local se advierte que dentro del cúmulo de facultades con las que cuenta el gobernador como autoridad elegida democráticamente, se encuentra una de carácter discrecional dirigida a nombrar notarios provisionales de manera directa, de entre una diversidad de sujetos con cualidades determinadas; que en consecuencia, atento a la naturaleza de la



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

designación directa de los notarios provisionales, que tiene su génesis en el ejercicio de una facultad discrecional, deriva que la persona que tenga formalmente reconocida la calidad de notario, carece de interés legítimo para reclamar o ser parte en un juicio ordinario civil en virtud de que ese entorno no incorpora a su esfera de derechos, ni aun de manera indirecta.

Tocante a este primer agravio expuesto por el inconforme, este Cuerpo Colegiado como órgano revisor, estima que el mismo deviene **inoperante**, virtud que lo argüido por el inconforme constituye simples afirmaciones genéricas por demás insuficientes y que, por tanto, no llegan a constituir un verdadero concepto de agravio, ya que no expone con precisión en qué consiste la lesión que se le causa con lo determinado por el primigenio al ordenar requerir a los demandados licenciada CRISTINA GABRIELA BONIFAZ VILLAR, Notario Público número 86 del Estado, licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, Notario Público número 178 del Estado y Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Chiapa de Corzo, Chiapas, para que dentro de tres días siguientes a su notificación, manifiesten a cuál de los dictámenes periciales se adhieren, y que de no hacerlo dentro del término concedido, se les tendrá adheridos a los dictámenes emitidos en autos; o bien, porqué se violan en su perjuicio las disposiciones legales señaladas en su motivo de disenso.

Se estima lo anterior, toda vez que aun cuando para la existencia de un verdadero argumento no se requiere que haya un razonamiento lógico jurídico a manera de silogismo, sino que para ello solo basta con expresar la causa de pedir; no obstante, la misma debe estar



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

sustentada en el agravio que se exprese y que se cause con lo determinado por la autoridad judicial, así como los motivos por los cuales se configura el mismo, lo que en la especie no se da, pues como se dijo, el inconforme solamente realiza afirmaciones imprecisas y genéricas, lo cual no constituye propiamente un agravio, al tratarse de una apreciación abstracta con relación a las funciones que ejercen los notarios públicos, lo que carece de sustento jurídico con relación al agravio en estudio y no permite a este Tribunal de Alzada, determinar si el primigenio actúo o no de forma indebida y contraria a derecho al ordenar requerir a los demandados Notario Público número 86 del Estado, Notario Público número 178 del Estado y Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Chiapa de Corzo, Chiapas, para que dentro de tres días siguientes a su notificación, manifiesten a cuál de los dictámenes periciales se adhieren y que de no hacerlo dentro del término concedido, se les tendrá adheridos a los dictámenes emitidos en autos; de manera que al no colmarse por el inconforme esa mínima exigencia, lo manifestado por éste a manera de agravio debe declararse **inoperante**, como al efecto se determinó en líneas precedentes.

Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 1ª./J. 81/2002<sup>1</sup>, de rubro y texto siguientes:

***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.***

<sup>1</sup> Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, localizable a página 61, registro digital 185425.



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

*El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.”*

También resulta aplicable por analogía la Jurisprudencia I.110.C., emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1600, con registro digital 176045, que dice:

**“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS SIMPLES EXPRESIONES GENÉRICAS Y ABSTRACTAS CUANDO NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.**

*Si no se está en el caso de suplir la deficiencia de los agravios en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, no basta que el recurrente exprese sus agravios en forma genérica y abstracta, es decir, que se concrete a hacer simples aseveraciones para que el Tribunal Colegiado emprenda el examen de la legalidad de la resolución recurrida del Juez de Distrito a la luz de tales manifestaciones, sino que se requiere que el inconforme en tales argumentos exponga de manera razonada los motivos concretos en los cuales sustenta sus propias alegaciones, esto es, en los que explique el porqué de sus aseveraciones, pues de lo contrario los agravios resultarán inoperantes.”*

Por otra parte, no se soslaya a lo anterior, que el inconforme en su motivo de disenso en estudio haya invocado la cita de preceptos legales que adujo fueron violados, no aplicados o aplicados



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

inexactamente, señalando para ello los ordinales 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, y demás relativos y aplicables al Código de Procedimientos Civiles del Estado; pues al respecto no precisa porque las disposiciones invocadas fueron como dijo violadas, no aplicadas o aplicadas inexactamente, máxime que no es lo mismo violar una disposición legal, no aplicarla o aplicarla incorrectamente; de ahí que sea indispensable precisar de los preceptos legales invocados cuál de los ordinales señalados fue violado o que artículo o artículos no fueron aplicados o fueron aplicados inexactamente; condición que resulta necesaria para que este Tribunal Pleno estuviera en aptitud de estudiar si se surte o no la violación alegada; por tanto, no es posible determinar si en ese sentido asiste o no razón al inconforme, pues las simples manifestaciones que hace aduciendo infracción de preceptos legales y transcribiendo diversos criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación a través de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, no pueden considerarse motivos de disenso si no se exponen argumentos concretos para demostrar que en el fallo impugnado se conculcaron los preceptos citados o si resultan aplicables los criterios transcritos; en consecuencia el agravio en estudio, se itera, deviene inoperante.

Ilustra la anterior determinación, la tesis aislada IV: 3o.C. 10 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del epígrafe siguiente:

***“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. NO LOS CONSTITUYEN LA SIMPLE CITA DE PRECEPTOS LEGALES O SU TRANSCRIPCIÓN. Las simples manifestaciones hechas por el inconforme aduciendo infracción de preceptos legales y transcribiendo párrafos de ellos, no pueden considerarse motivos de disenso si no expone argumentos concretos para***



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

*demostrar que en el fallo impugnado se conculcaron los preceptos citados. Además, se debe expresar cuál es la lesión que se causa, así como los motivos que originaron el agravio, a fin de que puedan ser examinados.<sup>2</sup>*

En un **segundo motivo de disenso** esencialmente refiere el inconforme que, parte del agravio que le causa el auto recurrido, es lo ordenado por el primigenio en cuanto a la prueba pericial en grafoscopía desahogada a efectos de verificar si la firma estampada en la escritura pública número 1,375, volumen 31, de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, fue puesta de puño y letra de \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* al referir en los hechos de su demanda no haberlo firmado, por lo que reclamó su nulidad absoluta; que sin embargo, el juez sostiene que de las copias certificadas de dicho instrumento se advierte que se trata de un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio limitado en cuanto a su objeto e irrevocable, que fue otorgado no solo por \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* sino también por la litisconsorte \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , que para conocer la verdad sobre los puntos cuestionados y dictar una sentencia lo más apegado a derecho, con la facultad que se le confiere al juzgador ordena la ampliación de la prueba pericial en grafoscopía a efecto de verificar si la firma estampada en la escritura pública que se reclama su nulidad fue puesta por la litisconsorte, ordenándose la toma de muestras y escrituras para los dictámenes periciales correspondientes; en esa medida sostiene el inconforme que lo acordado en dicho proveído vulnera los artículos 286, 287, 288, 289, 290, 291 y 292, y demás relativos del Código de Procedimientos

<sup>2</sup> Registro digital: 182899. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época, Materia(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Noviembre de 2003, página 926.



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

---

Civiles del Estado, debido a que únicamente se niega la firma estampada en dicha escritura por parte de \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , pero que en ningún momento se puso en duda la firma estampada por la litisconsorte \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , para que se analicen las firmas en él plasmadas, ya que en nada conlleva el ordenar la toma de muestras y escrituras de una persona de la cual no se objetó y controvertió de falsa la firma.

En ese caso sostiene el inconforme, que las partes deben ofrecer sus pruebas en los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vistas, expresando el hecho o hechos a demostrar, las razones por las que considera que demostrará sus afirmaciones, proporcionando los datos idóneos dependiendo del tipo de probanza; que una vez que las partes han presentado sus escritos y ofrecido las pruebas que consideren pertinentes, se hará la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas que serán desahogadas, siendo que para ofrecer pruebas, parte de los requisitos que deben cumplirse es que el ofrecimiento de las pruebas que las partes pretendan rendir en el juicio deben tener relación con los hechos o excepciones, a fin de determinar su admisión o desechamiento, sin que sea válido otorgar una mayor oportunidad probatoria a los demandados para reforzar los elementos aportados en su demanda.

Los anteriores motivos de inconformidad que el recurrente hace valer en su segundo agravio, por cuestión de técnica jurídica se estudiarán en un orden distinto al en que fueron expuestos; en estas condiciones, a juicio de este Tribunal de Alzada se estima que el agravio en estudio



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

resulta **fundado** y es suficiente para modificar el auto apelado en la parte que atañe, con base a lo siguiente.

Ciertamente, el artículo 289 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones; por otra parte tenemos que el diverso ordinal 298 del mencionado Código Adjetivo Civil del Estado, prevé que las partes deberán ofrecer sus pruebas en los escritos de demanda, contestación de demanda o reconvención y que después de ello ninguna prueba será admitida; así también, según lo dispone el artículo 299 del mismo cuerpo normativo, las pruebas deben ser ofrecidas relacionándolas con cada uno de los puntos controvertidos y que si no se hace relación de las pruebas ofrecidas en forma precisa, con los puntos controvertidos, serán desechadas.

Así, con relación al juicio que nos ocupa del escrito de demanda se advierte con meridiana claridad que el actor inconforme \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* , demandó de \*\*\*\* \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* ,

Licenciada CRISTINA GABRIELA BONIFAZ VILLAR, Notaria Pública número 86 del Estado de Chiapas, Licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, Notario Público número 178 del Estado de Chiapas y DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, la NULIDAD ABSOLUTA de la compraventa contenida en la escritura número 541, volumen número 8, de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2014 dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público 178 del Estado; así como la **NULIDAD ABSOLUTA del instrumento público número 1375, volumen 31, de fecha 31 treinta y uno de enero de**



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

**2012 dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público número 86 del Estado;** la cancelación total tanto en el protocolo de los notarios demandados, como en el apéndice respectivo de dicho testimonio y la cancelación total de la inscripción de la escritura 541, volumen número 8, y de las anotaciones marginales que se hubieran impuesto en su antecedente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el orden señalado por el demandante en sus prestaciones; señalando en el hecho cuatro de su demanda, lo que sigue: *“...4.- Igualmente como lo justifico con la copia certificada que anexo al presente en vía de prueba y que fuera expedida por el Secretario de este Juzgado, y que contiene el Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, Limitado en cuanto a su Objeto e irrevocable, pasado ante la fé del Notario Público No. 86 del Estado Licenciada Cristina Gabriela Bonifaz Villar, el mismo no fue firmado por el suscrito, y la firma que aparece en el mencionado instrumento no pertenece a la que uso en todos mis actos públicos y privados, y jamás he comparecido ante dicha Notaría para otorgar poder alguno, ni ningún otro; y, la firma que aparece no es del suscrito y que desde luego impugno; por lo tanto, no he dado mi consentimiento con el otorgamiento del mencionado poder; además, el Notario de referencia no cumplió con los requisitos que fija la fracción XII del artículo 157 de la mencionada Ley del Notariado para el Estado de Chiapas, porque no identificó plenamente a los otorgantes de dicho acto, ya que si bien es cierto manifestó que el suscrito lo acredita con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, pero omite los números de folios de ambas credenciales; también no inserta la fecha en que supuestamente se firmó dicho actos y en la que actualizó la escritura de referencia...”*



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

Por su parte, la litisconsorte \*\*\*\*\* llamada a juicio a petición del demandado \*\*\*\*\* al producir su contestación a la demanda mediante escrito de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, si bien refirió respecto a la demanda interpuesta por \*\*\*\*\* , que en cuanto a las prestaciones reclamadas a \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* , las marcadas con los incisos a) y b), deben ser declarados nulos los actos contenidos en los instrumentos que menciona, por que dicho actor no intervino y la suscrita (*sic*) no ha otorgado poder general para pleitos y cobranzas, para los efectos de que \*\*\*\*\* pudiera vender su propiedad a \*\*\*\*\* , respecto al bien que describe el actor \*\*\*\*\* ; también es verdad que la propia litisconsorte en su contestación de demanda, amén de referir que son ciertos los hechos uno, dos, tres y cuatro de la demanda, también señaló: “...Contra la acción intentada por \*\*\*\*\* , **no tengo ninguna excepción que oponer; soy conforme con la acción intentada, puesto que la suscrita no ha otorgado poder alguno a \*\*\*\*\* y/o Elisabet Gutiérrez Salinas.**”.

Luego entonces, de lo anterior se advierte con meridiana claridad que si bien \*\*\*\*\* expresó no haber otorgado poder alguno a \*\*\*\*\* , la misma señaló que no tenía ninguna excepción que oponer, y en cuanto a pruebas, únicamente ofertó la CONFESIONAL a cargo de \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* , haciendo suyas las probanzas ofrecidas por el actor consistentes en las DOCUMENTALES PÚBLICAS relativas a la copia certificada de la escritura pública número 35,428, del libro número 1,489, de fecha veinte de febrero de dos mil ocho, pasada ante la fe del Notario



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

Público número 46 del Estado de Chiapas, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Chiapa de Corzo, Chiapas, con el número 352, Libro dos, Tomo 1, Sección Primera, de fecha dieciocho de junio de dos mil ocho; la copia certificada de la escritura pública de compraventa número 541, volumen número 8, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público número 178 del Estado de Chiapas, inscrita con número de folio real 1151, según registro número 16799, de fecha treinta de octubre de dos mil catorce; la copia certificada expedida por el Juzgado de origen, que contiene la escritura pública número 1375, volumen 31, de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público número 86 del Estado de Chiapas, referente a un supuesto poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, según otorgado por \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*; ofertando de igual forma la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; sin que de las mismas se advierte que aun cuando negó haber otorgado poder general para pleitos y cobranzas a efectos de que \*\*\*\*\* pudiera vender su propiedad a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*; respecto al bien que describe el actor \*\*\*\*\*; lo cierto es que ésta expresamente expresó no tener ninguna excepción que oponer y tampoco ofertó para demostrar su dicho en el sentido que efectivamente no había otorgado poder general para pleitos y cobranzas a favor del demandado \*\*\*\*\* la prueba correspondiente de PERICIAL EN GRAFOSCOPIA, cuando en términos de los artículos 289, 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, como ya se adelantó, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, por



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

lo que las partes deben ofrecer sus pruebas en los escritos de demanda, contestación de demanda o reconvención, relacionándolas con cada uno de los puntos controvertidos, ya que después de ello ninguna prueba será admitida, salvo que se trate de pruebas supervenientes; pues la carga de la prueba, no es otra, sino la necesidad jurídica en que se encuentran las partes de probar determinados hechos y circunstancias, si pretenden obtener una sentencia favorable a sus pretensiones; por tanto, a criterio de este Cuerpo Colegiado, se estima incorrecta la determinación del primigenio en el sentido de ordenar el desahogo de la prueba PERICIAL EN GRAFOSCOPIA a cargo de la demandada (*litisconsorte pasivo necesario*) \*\*\*\*\* \*, a efecto de determinar si la firma que aparece en el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio limitado en cuanto a su objeto e irrevocable, cuya nulidad se demanda, corresponde o no a la misma; por lo que con su actuar, se violenta la garantía de debido proceso tutelada por los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo de la Ley Fundamental, en su vertiente de igualdad procesal de las partes; en esta medida el agravio en estudio deviene fundado y es apto para modificar el auto apelado en la parte que atañe.

A lo anterior, no se soslaya el contenido del artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en que el primigenio sustenta su determinación, el cual prevé que los tribunales pueden decretar en todo tiempo sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados; empero, lo anterior no implica actuar arbitrariamente en



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

perjuicio de las partes, por cuanto que, como ya se dijo, corresponde a la parte actora acreditar los elementos constitutivos de su acción y al reo los de sus excepciones, atento a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley Adjetiva Civil del Estado; esto es, que la parte interesada en demostrar un punto de hecho debe aportar la prueba conducente, gestionar su preparación y desahogo, pues en ella recae tal carga procesal; ya que atendiendo al espíritu de lo establecido en los artículos 286 y 287 del citado ordenamiento legal, en el sentido de que el Juez está facultado, entre otras cuestiones, para valerse de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas y de decretar en todo tiempo sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados; esta facultad de practicar diligencias para mejor proveer, debe entenderse como la potestad de la que se encuentra investido el juzgador para ampliar las diligencias probatorias previamente ofrecidas por las partes y desahogadas durante el proceso, siempre que considere que existen situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes en las probanzas; por lo que sólo en esa hipótesis, tales ampliaciones resultan indispensables para el conocimiento de la verdad sobre los puntos en litigio.

De ahí que la facultad de ordenar la práctica de las referidas diligencias, no entraña una obligación sino una potestad para los Jueces, de la que pueden hacer uso libremente, sin llegar al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento y desahogo de las pruebas que les corresponda aportar; porque de otra forma, se rompería con el



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

principio de equilibrio procesal e igualdad de las partes que debe observarse en todo litigio, ya que no debe perderse de vista que estamos frente a un asunto en el que prevalece el principio de estricto derecho; y en esas condiciones, tal facultad no puede entenderse en el sentido de eximir a las partes en su obligación de ofrecer, preparar y desahogar las pruebas que ofrezcan a fin de demostrar su acción o excepción, ni de perfeccionar las aportadas deficientemente para ese efecto.

En estas condiciones, como lo argumenta el inconforme, al ordenar el desahogo de la prueba PERICIAL EN GRAFOSCOPIA a cargo de la litisconsorte \*\*\*\*\* , el primigenio violentó en su perjuicio el contenido de los artículos 286, 287 y 289 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y en vía de consecuencia, el principio de igualdad procesal de las partes (*debido proceso*) tutelado por los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se estima por éste órgano revisor, que el principio de igualdad procesal como modalidad del debido proceso y de la igualdad jurídica, procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales y, al mismo tiempo, se erige como una regla de actuación del Juez, el cual, como director del proceso, debe mantener en lo posible esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. En esa medida, por los argumentos y fundamentos legales vertidos con antelación, este Tribunal de Alzada sostiene que el agravio en estudio deviene **fundado**.



**Toca número: 573-C-1C01/2018**  
**Primer subsecuente**  
**Expediente de origen: 464/2017**  
**y su acumulado 1069/2017**

Bajo los contextos anotados con antelación y ante lo **fundado** del **segundo agravio** hecho valer por el inconforme (*parte actora*), lo procedente es **MODIFICAR** el auto recurrido en la parte que atañe, para quedar en los términos siguientes:

**“...PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHIAPA.- CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; A 26 VEINTISÉIS DE ABRIL DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.-----**

- - - **VISTO:** El estado procesal que guardan los presentes autos, de lo cual se advierte que en proveído de fecha 11 once de abril de 2024 dos mil veinticuatro, se ordenó citar a las partes para oír sentencia definitiva; sin embargo, una vez que fueron revisadas las constancias que obran en él, se advierte que existe imposibilidad para dictar la resolución que en derecho corresponde, por cuanto que, sin prejuzgar sobre la procedencia u improcedencia del presente, se pone de manifiesto que en los autos del expediente 1069/2017, mediante oficio número JCC/2055/E/A/2017, fue remitido a la Primera Sala Regional Colegiada en materia Civil, Zona 01 Tuxtla, el documento base consistente en copia certificada del instrumento público número 7,149 siete mil ciento cuarenta y nueve, libro 100, paso ante la fe del Licenciado Gilberto de Jesús Batiz López, titular de la notaría pública número 32 treinta y dos del Estado, constante de tres fojas, en el que consta el Poder General para Pleitos y Cobranzas otorgado por \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, a favor de \*\*\*\*\*, el cual había sido requerido por la superioridad mediante oficio 1084-C/2018, dentro del Toca Número 573-C-1C01/2018, formado con motivo al recurso de apelación interpuesto por \*\*\*\*\* en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas del actor \*\*\*\*\* , en contra del auto 21 veintiuno de septiembre de 2018 dos mil dieciocho; sin embargo mediante oficio 154-C/2019, fue remitido testimonio de la resolución pronunciada sin la devolución del instrumento público enviado. Poder que es necesario tener a la vista, pues, de las constancias de autos se advierte que aún no se ha resuelto la excepción de falta de personalidad planteada por los demandados, la cual debió de haber sido resuelta previamente, sin embargo, al no haberse dictado la resolución correspondiente, el juzgador deberá resolverla en la sentencia definitiva. En consecuencia, mediante oficio requiérase a la Primera Sala Regional Colegiada en materia Civil, Zona 01 Tuxtla, el documento base remitido, debiendo anexar copia de los oficios antes mencionados.-

- - - Por otra parte, en los autos del expediente número 464/2017, fue desahogada la prueba Pericial en Grafoscopia; sin embargo, indebidamente



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

no fue designado de común acuerdo perito de los demandados ni este juzgado nombró un perito en rebeldía de los demandados; por lo que únicamente obra en autos los dictámenes emitidos por el perito nombrado por el actor \*\*\*\*\* y el perito nombrado por el demandado \*\*\*\*\* y el perito nombrado por este juzgado en rebeldía por el demandado \*\*\*\*\* no así dictámenes periciales de los demás demandados; y por cuanto cuando las partes no oponen las mismas excepciones no están obligadas a litigar unidas y por lo tanto se debió haber designado perito en rebeldía de los demás codemandados, de conformidad con la fracción I del artículo 355 del Código Adjetivo Civil del Estado; a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, por conducto del ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO **REQUIÉRASELES** a la Licenciada CRISTINA GABRIELA BONIFAZ VILLAR, Notario Público número 86 ochenta y seis del Estado, al Licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, Notario Público número 178 ciento setenta y ocho del Estado y al Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Chiapa de Corzo, Chiapas, en los domicilios señalados en autos para que dentro del término de **03 TRES DÍAS** contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, como lo establece el artículo 137 fracción IV del ordenamiento legal antes invocado; manifiesta a cuál de los dictámenes periciales se adhieren. **APERCIBIDOS** que de no hacerlo dentro del término concedido se les tendrá adheridos a los dictámenes emitidos en autos.----- **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...**”

Por lo expuesto, motivado y fundado, esta Sala:

**R E S U E L V E:**

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** el auto de veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, pronunciado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del distrito judicial de Chiapa, en autos del expediente **464/2017**, relativo al Juicio **ORDINARIO CIVIL (ACCIÓN DE NULIDAD DE ESCRITURA)**, tramitado por \*\*\*\*\* y el perito nombrado por el demandado \*\*\*\*\* y el perito nombrado por este juzgado en rebeldía por el demandado \*\*\*\*\* licenciada **CRISTINA GABRIELA BONIFAZ VILLAR**, Notaria Pública número 86 del Estado de Chiapas, licenciado **LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA**, Notario Público número 178 del Estado de Chiapas y **DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO**



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

---

**DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; *para quedar en los términos ordenados en la parte in fine del considerando CUARTO de la presente resolución.***

**SEGUNDO.** Remítase copia autorizada de la presente resolución, al Juzgado de su procedencia, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Oportunamente archívese el toca como corresponda.

**TERCERO.** Notifíquese **personalmente** y cúmplase.

Así lo resolvieron los integrantes de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por unanimidad de votos de los Ciudadanos Magistrados, **Licenciada CLAUDIA LUCIA DOMINGUEZ ACUÑA**, Licenciado GUILLERMO HORACIO ESPONDA ORANTES y Licenciada MARIA ITZEL BALLINAS BARBOSA, **siendo Presidenta y Ponente la primera de los nombrados**, en términos de la circular número 02, de fecha diez de enero de dos mil veinticuatro, signada por la Maestra PATRICIA RECINOS HERNANDEZ, Secretaria Ejecutiva del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por el que se informó que a partir del 15 quince de enero de 2024 dos mil veinticuatro, esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, queda integrada como se ha señalado en líneas que preceden, quienes firman ante la licenciada CLAUDIA VIDAL HERNANDEZ, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.



Toca número: 573-C-1C01/2018  
Primer subsecuente  
Expediente de origen: 464/2017  
y su acumulado 1069/2017

---

MAGISTRADA PRESIDENTA  
TITULAR DE LA PONENCIA “C”

LIC. CLAUDIA LUCIA DOMINGUEZ ACUÑA

MAGISTRADO TITULAR DE LA PONENCIA “B”

LIC. GUILLERMO HORACIO ESPONDA ORANTES

MAGISTRADA TITULAR DE LA PONENCIA “A”

LIC. MARIA ITZEL BALLINAS BARBOSA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

LIC. CLAUDIA VIDAL HERNANDEZ

LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL, ZONA 01, TUXTLA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA: QUE LA FIRMA QUE CALZA LA PRESENTE FOJA, SON PARTE DE LA SENTENCIA DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, DICTADA EN EL TOCA CIVIL 573-C-1C01/2018 PRIMER SUBSECUENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

LIC. CLAUDIA VIDAL HERNANDEZ

CLDA/MTCN'YRL.

*ELIMINADO: 31 elementos. FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos; 3 de la Constitución Política del estado libre y Soberano de Chiapas; 100, 106 fracción III, 107 y 116 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 134, 139, y 140 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; Séptimo fracción III y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. MOTIVO: se trata de información confidencial concerniente a datos personales identificativos.*